

aurora

VOCES JESUITAS SOBRE LA PANDEMIA

Febrero • Año 2021 • N° 15 • Distribución gratuita



MOMENTO NOÉ



Coordinador aurora
Roberto Jaramillo S.J.

Responsabilidad Editorial
**Conferencia de Provinciales Jesuitas
de América Latina y El Caribe (CPAL)**

Producción Editorial
**abediciones de la Universidad
Católica Andrés Bello
Caracas-Venezuela**

Corrección de textos
Maritza Barrios

Diseño Gráfico
Isabel Valdivieso

Colaboradores
**Carlos Ayala Ramírez
Reinaldo Rojas
José Ivo Follman S.J.
Luis Felipe Lacerda
Juan Salvador Pérez
María López Vigil
Arturo Grigsby
Omar Serrano
Amparo Marroquín
Jenny Paola Ortiz
Juan Pablo Guerrero Home
Luis Guillermo Guerrero Guevara
Marco Fidel Vargas Hernández
Socorro Ramírez
Jorge A. Huete-Pérez
Allan Figueroa Deck, S.J.**

Dirección de la CPAL
**Ave. Fulgencio Valdez 780,
Distrito Breña, Lima 5 - Perú**

Visite nuestra página en la WEB
www.jesuitas.lat

aurora es una publicación digital de la
Conferencia de Provinciales Jesuitas de
América Latina y El Caribe-CPAL

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	3
1. MIRADA CREYENTE DEL PAPA FRANCISCO ANTE EL COVID-19 Y OTRAS PANDEMIAS Carlos Ayala Ramírez	5
2. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: UNA REGIÓN CON MUCHAS ARISTAS.....	10
2.1. Visión general Reinaldo Rojas.....	11
2.2. Brasil: Justicia socioambiental y extractivismo José Ivo Follman S.J. y Luis Felipe Lacerda	13
2.3. Venezuela: Crisis social y conflicto político Juan Salvador Pérez	16
2.4. Nicaragua: Autoritarismo y represión.....	19
2.5. El Salvador: Nayib Bukele y la democracia mediática Omar Serrano y Amparo Marroquín	22
2.6. Colombia: Extractivismo y derechos humanos Jenny Paola Ortiz y Juan Pablo Guerrero Home	25
3. LA DESIGUALDAD, LA MOVILIZACIÓN SOCIAL Y LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO COLOMBIANO EN TIEMPOS DE PANDEMIA Luis Guillermo Guerrero Guevara y Marco Fidel Vargas Hernández	29
4. VECINOS PARA SIEMPRE: COLOMBIA Y VENEZUELA SOCORRO RAMÍREZ.....	41
5. HACERSE EL SUECO CON EL CORONAVIRUS: LA IGNORANCIA AL TIMÓN EN NICARAGUA Jorge A. Huete-Pérez	49
6. DE PRESIDENTE MÁS <i>COOL</i> A PRIMER DICTADOR MILLENNIAL Omar Serrano	55
7. MIRAR LA PANDEMIA EN PERSPECTIVA ESPIRITUAL Allan Figueroa Deck, S.J.	63

PRESENTACIÓN

“Cuando se asume la hermenéutica de la periferia se caen posibles vendas y tenemos la oportunidad de ver con ojos nuevos” y de percibir el mundo tal cual es con todos sus desafíos, pero también con todas sus posibilidades (Carlos Ayala). Para eso abrimos el volumen número 15 de Aurora con una mirada creyente, inspirados en la palabra del papa Francisco que considera la pandemia del COVID-19 como nuestro **“momento Noé”**, y nos recuerda que la nueva normalidad que esperamos sólo será posible *“siempre y cuando encontremos el arca de los lazos que nos unen, de la caridad, de la común pertenencia”* (del libro *Soñemos Juntos*).

Hace justamente un año nadie en América Latina y El Caribe pensaba que esto sería realmente una pandemia, y las noticias que llegaban de tierras distantes parecían cosa que fuese a tener nada con nosotros. Hoy las cifras son aterradoras y las perspectivas próximas francamente desalentadoras. La globalización del COVID-19 vino para demostrarnos que el mundo es una aldea pequeña donde todos estamos interconectados y donde la responsabilidad global es compartida. **El virus es una denuncia de que existen otras pandemias** a las cuales no hemos prestado suficiente atención y cuidado: la pandemia **del hambre** que martirizó a 690 millones de personas sólo en 2020; la pandemia **de la migración forzada** que desplazó a casi 80 millones de personas en 2019; la pandemia **de las guerras** que devastan múltiples naciones en el mundo; la pandemia **del comercio y tráfico de armas** que sólo en ganancias representan más de 500.000 millones de dólares anuales; la pandemia **de la corrupción** que le cuesta al mundo alrededor de 3,5 billones de dólares anuales; la pandemia **de la agresión sistemática y repetida al ambiente en un planeta** que, de no cambiar las prácticas antrópicas, comenzará a morir en 2050. **Y por encima de todo la pandemia de la indiferencia** *“cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión: creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca”* (FT 30).

La serie de artículos que forman esta revista recoge en primer lugar, algunas de las conclusiones de los ciclos de análisis de la realidad que promovió la Red de Centros Sociales de la CPAL en el primer semestre de 2020 sobre Brasil, Venezuela, Nicaragua, el Salvador y Colombia. Los vínculos virtuales para asistir a las grabaciones de esos debates están indicados al final de cada artículo, siendo que estas transcripciones -como es obvio- tienen menos fuerza y expresan menos que el debate provocado. En seguida se ofrece una colección de cinco artículos en los cuales un grupo de especialistas actualiza la lectura anterior ofreciendo un diagnóstico sobre la situación actual de la pandemia y de las *‘sindemias socio-ecológicas’* (causas estructurales que potencializan los efectos de un pequeño virus sin voluntad ni poder propios) en esos países.


“La historia de Noé en el Génesis no habla solo de cómo Dios ofreció una salida de la destrucción; habla también de todo lo que pasó después. La regeneración de la sociedad humana implicó volver a respetar los límites, frenar la carrera por la riqueza y el poder, cuidar de aquellos que viven en la periferia”. **“Ojalá que al final ya no estén los ‘otros’, sino sólo un ‘nosotros’”**, clama el papa Francisco (Soñando Juntos)

ROBERTO JARAMILLO, S.J.
Presidente de la CPAL

MOMENTO
NOÉ

aurora

VOCES JESUITAS SOBRE LA PANDEMIA

A large, stylized number '1' is positioned on the left side of the page. The vertical stem of the '1' is orange, while the top horizontal bar is dark blue. The number is outlined in white.

MIRADA
CREYENTE
DEL PAPA
FRANCISCO
ANTE EL
COVID-19
Y OTRAS
PANDEMIAS



Carlos Ayala Ramírez¹

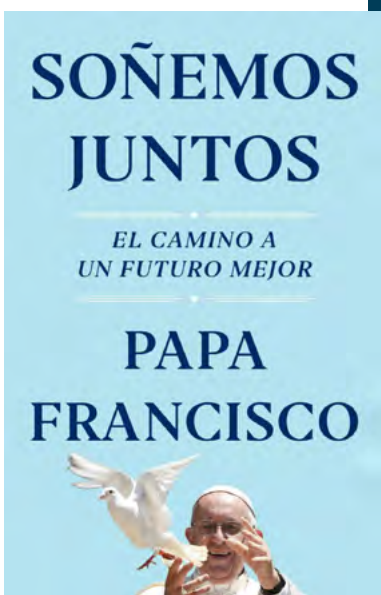
5

Contemplar (ver), discernir (pensar) y proponer (actuar) es el modo que tiene el papa Francisco “de estar en la realidad”. Un modo que pone la inteligencia y el corazón en “los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los hombres [y mujeres] de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren...”. Y esto es así, porque el cristianismo, como modo creyente, consciente y comprometido de estar en la realidad, es una forma de ser (humano), de pensar (crítico), de sentir (el sufrimiento ajeno), de actuar (compasivamente) y de celebrar (la vida).

Este modo humano y creyente de situarse en la realidad asume que, para desarrollar la misión humanizadora de la Iglesia, es necesario conocer y comprender el mundo en que vivimos; escudriñar bien las señales de los tiempos e interpretarlas a la luz del Evangelio. Las exhortaciones y encíclicas del papa Francisco tienen este carácter. También lo tienen sus gestos de cercanía y apertura que buscan la participación y compromiso del pueblo. Por eso, de él se ha dicho que es expresión actualizada del espíritu del Concilio Vaticano II.

Para abordar su mirada creyente sobre el COVID-19 y otras pandemias nos centramos en tres de sus escritos más recientes: la encíclica *Fratelli Tutti*. Sobre la fraternidad y la amistad social (FT); el libro *Soñemos juntos. El camino a un futuro mejor* (SJ); y el mensaje para la 54 Jornada Mundial de la Paz 2021 (JMP).

¹ Profesor del Instituto Hispano de la Escuela Jesuita de Teología (Universidad Santa Clara, CA). Profesor de la Escuela de Liderazgo Hispano de la Arquidiócesis de San Francisco, CA. Profesor jubilado de la UCA El Salvador; exdirector de radio universitaria YSUCA. Antiguo profesor externadista.



Este modo humano y creyente de situarse en la realidad asume que, para desarrollar la misión humanizadora de la Iglesia, es necesario conocer y comprender el mundo en que vivimos; escudriñar bien las señales de los tiempos e interpretarlas a la luz del Evangelio. Las exhortaciones y encíclicas del papa Francisco tienen este carácter. También lo tienen sus gestos de cercanía y apertura que buscan la participación y compromiso del pueblo. Por eso, de él se ha dicho que es expresión actualizada del espíritu del Concilio Vaticano II.

El hilo conductor de la encíclica FT es que, a partir del reconocimiento de la igual dignidad de la persona humana, podamos hacer renacer, entre todos, un deseo mundial de hermandad. El libro SJ por su parte, nace en el contexto de la primera cuarentena a causa del COVID-19 y plantea la convicción de que este es el momento para soñar en grande, para repensar nuestras prioridades y para comprometernos en lo pequeño y actuar en función de lo que hemos soñado. Por otro lado, el mensaje de la JMP proclama que la humanidad puede progresar por el camino de la fraternidad, la justicia y la paz, acentuando la cultura del cuidado y erradicando la cultura de la indiferencia, el rechazo y la confrontación.

Desde estos textos, podemos decir que la mirada creyente de Francisco arranca de una experiencia singular del Misterio de Dios y del acontecimiento de la Encarnación (el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros). También arranca de lo que inspira la práctica solidaria (con los pobres) de la Iglesia primitiva. Respecto a lo primero, el papa manifiesta su fe en “un Dios que eligió la periferia del mundo como lugar para revelar, en Jesús, su acción salvadora en la historia” (SJ). Luego, describe el ministerio de Jesús como una vida que lleva a “caminar con los pobres, los rechazados, los marginados, derribando el muro que impedía al Señor estar cerca de su pueblo...” (SJ). De la Iglesia afirma que “nació en la periferia de la Cruz donde se encuentran tantos crucificados. [Por ello] si se desentendiéndose de los pobres deja de ser la Iglesia de Jesús y revive las viejas tentaciones de convertirse en una élite...” (SJ).

Ahora bien, ¿cómo ha hablado el papa Francisco de Dios en tiempos de pandemia y pos pandemia? Veamos algunos rasgos primordiales:

En primer lugar, nos ha comunicado una imagen sana de Dios, contraria al “Dios del miedo”, al que se le atribuyen las durezas terribles de la vida como castigo suyo. Cuando el Papa habla de Dios en estas circunstancias habla de un Dios que es aliado nuestro, no nuestro enemigo. Un Dios cuya esencia es la misericordia y, por tanto, nunca es indiferente: “Dios sabe, siente y viene corriendo a buscarnos, sale a nuestro encuentro” (SJ). Pero es también un Dios que cuenta con nosotros en la concreción de su ser compasivo. En esta línea, el Papa afirma que “siempre que haya una respuesta en el mundo que sea inmediata, cercana, cariñosa, preocupada, ahí está presente el Espíritu de Dios” (SJ). Los mártires de la pandemia (enfermeras, médicos, voluntarios, etc.) son ejemplo de ello.

Desde su mirada creyente, Francisco considera la pandemia del COVID-19 como nuestro “momento Noé”. Esto, “siempre y cuando encontremos el Arca de los lazos que nos unen, de la caridad, de la común pertenencia”. Asimismo, recuerda que “la historia de Noé en el Génesis no habla solo de cómo Dios ofreció una salida de la destrucción; habla también de todo lo que pasó después. La regeneración de la sociedad humana implicó volver a respetar los límites, frenar la carrera por la riqueza y el poder, cuidar de aquellos que viven en la periferia” (SJ).

En segundo lugar, ha remarcado que Dios está siempre al lado del empobrecido y excluido. Dios ha otorgado su primera misericordia a los pobres. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres. Esto supone ser dóciles y atentos a su clamor. De ahí la necesidad de ver la realidad desde las periferias geográficas y existenciales. Cuando se asume la hermenéutica de la periferia se caen posibles vendas y tenemos la oportunidad de ver con ojos nuevos, se ve el mundo tal cual es (con sus desafíos y posibilidades). En esa perspectiva, el Papa señala que la crisis puso al descubierto la cultura del descarte. Las exigencias sanitarias del COVID visibilizaron cómo tantas personas no tenían una vivienda donde vivir el distanciamiento social obligatorio ni agua limpia con la que higienizarse. También puso en evidencia otra pandemia: la del virus de la indiferencia que nos hace mirar siempre para el otro lado. Uno de los peligros de este “estado de indiferencia” es que puede volverse algo “normal” y termine por impregnar silenciosamente nuestros estilos de vida (FT n.73).



Desde su mirada creyente, Francisco considera la pandemia del COVID-19 como nuestro “momento Noé”. Esto, “siempre y cuando encontremos el Arca de los lazos que nos unen, de la caridad, de la común pertenencia”. Asimismo, recuerda que “la historia de Noé en el Génesis no habla solo de cómo Dios ofreció una salida de la destrucción; habla también de todo lo que pasó después. La regeneración de la sociedad humana implicó volver a respetar los límites, frenar la carrera por la riqueza y el poder, cuidar de aquellos que viven en la periferia”

Desde la periferia se constata una humanidad gravemente enferma. La causa no deriva solo del COVID-19. Para Francisco existen miles de otras crisis igual de terribles, pero son tan lejanas a algunos de nosotros que podemos actuar como si no existieran. Señala, por ejemplo, las guerras diseminadas en distintas partes del mundo, la producción y el tráfico de armas; los cientos de miles de refugiados que huyen de la pobreza, las faltas de oportunidad y el hambre. Sobre esto último menciona un dato que debería conmocionarnos: en los primeros cuatro meses del año 2020 murieron 3,7 millones de personas a causa del hambre (SJ).

Y respecto a la pos pandemia, el papa expresa sus preocupaciones por lo que puede ocurrir pasada la crisis. Señala que la peor reacción sería la de caer, aún más, en una fiebre consumista y en nuevas formas egoístas de autopreservación. Y enseguida pone de manifiesto cuatro hondos deseos para contrarrestar esas tendencias: “Ojalá que al final ya no estén los ‘otros’, sino sólo un ‘nosotros’. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y des-

cubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado” (FT n. 35).

Desde los desafíos que plantea la periferia del mundo, el Papa sostiene que es el momento para un nuevo proyecto que efectivamente incluya. Para un nuevo humanismo que pueda canalizar la irrupción de fraternidad y que termine con la globalización de la indiferencia y la hiperinflación del individuo. En este plano, la política puede y debe desempeñar un rol decisivo, pero no cualquier política. El papa piensa en lo que él llama “una sana política” capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas (FT n.179). Es la política que tiene como horizonte el bien común (FT n.182), el respeto irrestricto de los derechos humanos (FT n.189), la atención al clamor de los pobres (FT n.187), la conversión de los liderazgos (FT n.166), y el cultivo de la participación y la vida comunitaria (FT n.182), entre otros.

Desde luego que esa política requiere, según el Papa, de buenos políticos que se preocupen “de la fragilidad de los pueblos y de las personas”. En este sentido sostiene que “las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas, sino por no resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias...” (FT n.188).

En tercer lugar, el Papa habla de un Dios protector y cuidador de la vida. En el mensaje para la 54 JMP, que tiene por lema “La cultura del cuidado como camino de paz”, comienza con una grave constatación: “la gran crisis sanitaria de COVID-19, se ha convertido en un fenómeno multisectorial y mundial, que agrava las crisis fuertemente interrelacionadas, como la climática, alimentaria, económica y migratoria, y causa grandes sufrimientos y penurias” (JMP n.1). Desde el corazón puesto en los que sufren, Francisco aboga por una cultura del cuidado, entendida como “el compromiso común, solidario y participativo para proteger y promover la dignidad y el bien de todos, como una disposición al cuidado, a la atención, a la compasión, a la reconciliación y a la recuperación, al respeto y a la aceptación mutuos...” (JMP n.9).

Hace ver la importancia que tiene la cultura del cuidado en la tradición cristiana. Habla de un fundamento bíblico, el Dios de la Biblia no es solo un Dios Creador, sino también un Dios Cuidador. Reseña que el cuidado de la creación está en la base de la institución judía del sábado que, además de regular el

A pesar del constante desgaste social en todos los pueblos perdura una reserva de valores fundamentales. El Papa los denomina el “alma del pueblo”, entendida como la lucha por la vida desde la concepción a la muerte natural, la defensa de la dignidad humana, el amor por la libertad, la preocupación por la justicia y la creación, el amor de la familia y la fiesta. Ese tiempo de acción, desencadenado por la fuerza de la esperanza, exige recuperar el protagonismo de los pueblos y el sentido de pertenencia, de sabernos parte de un pueblo al que debemos cuidar y potenciar.

culto divino, tenía como objetivo restablecer el orden social y el cuidado de los pobres. La celebración del Jubileo, con ocasión del séptimo año sabático, permitía una tregua a la tierra, a los esclavos y a los endeudados (JMP n.3).

También señala una motivación profética donde la cumbre de la comprensión bíblica de la justicia se manifestaba en la forma en que una comunidad trataba a los más débiles que estaban en ella. Asimismo, plantea que la cultura del cuidado tiene una motivación cristológica: en la sinagoga de Nazaret, Jesús se manifestó como Aquel a quien el Señor ungió “para anunciar la buena noticia a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, dejar en libertad a los oprimidos”. En su compasión, Jesús se acercaba a los enfermos del cuerpo y del espíritu y los curaba; perdonaba a los pecadores y les daba una vida nueva. Él era el Buen Pastor que cuidaba de las ovejas; era el Buen Samaritano que se inclinaba sobre el hombre asaltado, vendaba sus heridas y se ocupaba de él. Estas acciones constituyen el testimonio más elocuente de una misión que apunta hacia una cultura del cuidado (JMP n.4).

Remite también a una motivación eclesiológica. Los cristianos de la primera generación compartían lo que tenían para que nadie entre ellos pasara necesidad y se esforzaban por hacer de la comunidad un hogar acogedor, abierto a todas las situaciones humanas, listo



para hacerse cargo de los más frágiles (JMP n.5). Desde esta inspiración creyente, el Papa invita a que todos podamos convertirnos en profetas y testigos de la cultura del cuidado. Y eso pasa por cultivar la promoción de la dignidad de toda persona humana, la solidaridad con los pobres y los indefensos, la preocupación por el bien común y la salvaguardia de la creación. De esa manera la cultura del cuidado se convierte en una condición necesaria para que haya paz social.

Desde un Dios para el cual lo primero es la misericordia, que se inclina a favor de los empobrecidos y que es amigo de la vida, es posible mantener la esperanza. Es decir, mirar al futuro con realismo, sin hacerse falsas ilusiones, pero sin descuidar las posibilidades de mayor justicia e inclusión. Es la esperanza “enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive”. No es simple optimismo. El Papa habla “de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor” (FT n.55). Quien vive animado por la esperanza cristiana supera el narcisismo, que lleva al egocentrismo; el desánimo, que lleva al aislamiento; y el pesimismo, que nos cierra las posibilidades de futuro.

A pesar del constante desgaste social en todos los pueblos perdura una reserva de valores fundamentales. El Papa los denomina el “alma del pueblo”, entendida como la lucha por la vida desde la concepción a la muerte natural, la defensa de la dignidad humana, el amor por la libertad, la preocupación por la justicia y la creación, el amor de la familia y la fiesta. Ese tiempo de acción, desencadenado por la fuerza de la esperanza, exige recuperar el protagonismo de los pueblos y el sentido de pertenencia, de sabernos parte de un pueblo al que debemos cuidar y potenciar.

Y para no quedarnos en las abstracciones de los “grandes ideales” el papa propone empezar a ver posibilidades nuevas, al menos en las pequeñas cosas que nos rodean, o en lo que hacemos cotidianamente. Explica que a medida que nos vamos comprometiendo con esas pequeñas cosas, empezamos a imaginar otra manera de vivir juntos, de servir a otros. Podemos empezar a soñar un cambio real, posible y deseable. La exhortación es clara: “atrevámonos a soñar” (SJ), pero con los pies en la tierra. Sin excusas, hay que convertir en algo normal el amor, y no el odio; convertir en algo común la solidaridad, no la indiferencia; convertir en algo habitual la cultura del cuidado, no la cultura del descarte. En la visión creyente del Papa, una condición necesaria para asegurar la dirección del cambio es ir a la periferia. Lugares de exclusión y sufrimiento, pero también de posibilidades que apuntan hacia un futuro mejor.



AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE:
UNA REGIÓN
CON MUCHAS
ARISTAS



VISIÓN GENERAL

Un análisis de la realidad de América Latina y El Caribe requiere tomar en consideración esa unidad en la pluralidad, esa diversidad, para asumir una perspectiva analítica que contemple su riqueza y complejidad social, y combine la tradicional visión global (en gran parte muy influida por enfoques y categorías occidentales), con las especificidades regionales y nacionales y con nuestras formas culturales de conocimiento ancestral, a fin de enriquecer el análisis político coyuntural y hacerlo más cercano a las formas de vida de nuestras comunidades.

Reinaldo Rojas¹

América Latina y el Caribe es una realidad histórica, rica y compleja, cuyo estudio conduce a errores cuando se aborda como un todo homogéneo. Cronológicamente hablando, ni en el pasado aborígen pre-colonial ni en el periodo colonial y mucho menos en el tiempo histórico republicano correspondiente a los actuales Estados Nacionales independientes del siglo XIX y XX, podemos hablar de América Latina como algo uniforme. Pero tampoco se trata en la actualidad de un conglomerado de pueblos y culturas aisladas entre sí, apenas localizadas a lo largo de un mismo continente. En cada tiempo histórico, ha habido encuentros y desencuentros, integración y desintegración entre los grupos humanos, pueblos y naciones que han hecho su historia en un continente separado del resto del mundo por dos océanos.

Un análisis de la realidad de América Latina y El Caribe requiere tomar en consideración esa unidad en la pluralidad, esa diversidad, para asumir una perspectiva analítica

¹ Doctor en Historia, Profesor Titular jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Miembro de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, como Individuo de Número, y colaborador del Centro Gumilla. Encargado de la revisión de los videos con las conferencias virtuales de la serie "Análisis de la realidad de América Latina y El Caribe", para la presentación de esta visión general y de los textos sobre los casos de Brasil, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Colombia, analizados por panelistas expertos y participantes, en el primer semestre de 2020.

que contemple su riqueza y complejidad social, y combine la tradicional visión global (en gran parte muy influida por enfoques y categorías occidentales), con las especificidades regionales y nacionales y con nuestras formas culturales de conocimiento ancestral, a fin de enriquecer el análisis político coyuntural y hacerlo más cercano a las formas de vida de nuestras comunidades.

La realización de la serie: “Análisis de la realidad de América Latina y El Caribe: Estudio de casos”, que la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe (CPAL), a través de la coordinación de la Red de Centros Sociales, inició en el 2020, busca motivar ese cruce metodológico en el análisis coyuntural de casos nacionales, con un enfoque socio-histórico más estructural, que sin desconocer las vivencias de lo cotidiano, permita registrar tendencias de desarrollo y hacerles seguimiento en el mediano plazo. Para lograr ese propósito, hemos contado con la participación, por vía virtual, de un grupo de especialistas de cada país, los cuales han abordado un caso específico nacional, para su interpretación y debate abierto y plural. Ese material lo hemos sistematizado en una serie de artículos que ahora se presenta en esta breve contextualización para ayuda del lector. Cada caso, analizado en conjunto, nos permitirá reconocer tendencias a futuro, enriqueciendo con ello el camino de la acción política y social del presente.

En esta oportunidad, presentamos los siguientes casos analizados en el primer semestre del año 2020: Brasil, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Colombia. ¿Qué podemos decir de estos países, para una mejor comprensión de nuestros lectores?

En términos geográficos, Brasil, Venezuela y Colombia son países suramericanos, mientras Nicaragua y El Salvador forman parte de la región centroamericana. Brasil, de lengua portuguesa, es una de las mayores economías de América Latina y del mundo, mientras Venezuela y Colombia, comparten con el gigante suramericano su fachada amazónica, pero son países andinos con costas en el Mar Caribe y, en el caso de Colombia, con el Pacífico. Estas realidades geopolíticas están presentes en los análisis que a continuación se presentan.

Todos los casos estudiados tienen como base común una profunda crisis social que, en casos como Venezuela, amenaza la sobrevivencia de la población, lo cual ha sido causa efectiva de la masiva emigración que se vive en los actuales momentos en ese país y también en El Salvador y Ni-

caragua, emigración forzada a los países vecinos que ha generado tensiones y amenazas a la estabilidad de la misma región. Esta tendencia no parece que vaya a disminuir en el 2021. El problema de la migración, la situación del migrante y el crecimiento en número de refugiados es hoy uno de los grandes temas humanitarios, políticos y sociales de América Latina y El Caribe en este 2021, junto a la expansión de la pobreza, la exclusión y la agresión al medio ambiente, todo ello agravado con la llegada de la pandemia de la COVID-19.

Además, la manipulación del sentimiento religioso con fines políticos ha estado presente en casos como Brasil y El Salvador, así como la degradación de la política como herramienta para el acuerdo, la convivencia y la reconciliación en casos como Venezuela, Nicaragua y Colombia. Frente a la debilidad de los liderazgos tradicionales y la crisis de las organizaciones políticas, ha surgido un tipo de liderazgo mesiánico, personalista y autocrático que ha echado por tierra los ideales de una democracia participativa, ciudadana e inclusiva. La renovación del liderazgo político parece surgir, más bien, de la lucha concreta que llevan a cabo los movimientos sociales por la defensa de los derechos humanos, los derechos ambientales y culturales.

Todos los casos estudiados tienen como base común una profunda crisis social que, en casos como Venezuela, amenaza la sobrevivencia de la población, lo cual ha sido causa efectiva de la masiva emigración que se vive en los actuales momentos en ese país y también en El Salvador y Nicaragua, emigración forzada a los países vecinos que ha generado tensiones y amenazas a la estabilidad de la misma región. Esta tendencia no parece que vaya a disminuir en el 2021. El problema de la migración, la situación del migrante y el crecimiento en número de refugiados es hoy uno de los grandes temas humanitarios, políticos y sociales de América Latina y El Caribe



BRASIL: JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL Y EXTRACTIVISMO

José Ivo Follman S.J.
y Luis Felipe Lacerda¹

13

Por Justicia Socio-ambiental se entienden todas aquellas acciones dirigidas a superar las injusticias que aún persisten en Brasil como herencia colonial, y que reproduce el actual modelo de desarrollo neoliberal generador de desigualdades sociales y agresiones ambientales. Este concepto integra la Justicia Social con la Justicia Ambiental.

Brasil es un Estado Federal dividido en 26 Estados y un Distrito Federal, que actualmente cuenta con 207 millones de habitantes y una diversidad étnico-cultural, que se puede apreciar en la existencia de 252 pueblos indígenas y la segunda población afrodescendiente más gran del mundo, la cual constituye el 54,9 % de la población del país. Además, el 54 % de población es femenina. Por otro lado, Brasil cuenta con una gran riqueza hidrográfica y ambiental, con seis grandes ecosistemas, entre los que destaca la Amazonía, lo cual explica el tema central de esta exposición, relacionado con la “Justicia Socio-ambiental”.

Por Justicia Socio-ambiental se entienden todas aquellas acciones dirigidas a superar las injusticias que aún persisten en Brasil como herencia colonial, y que reproduce el actual modelo de desarrollo neoliberal generador de desigualda-

¹ Los ponentes que participaron en el “Análisis de la Realidad de América Latina y El Caribe: caso Brasil” fueron los doctores José Ivo Follman S.J., sociólogo, Secretario para la Justicia Ambiental de Brasil; y Luis Felipe Lacerda, psicólogo, Secretario Ejecutivo del Observatorio Nacional de Justicia Socio-ambiental “Luciano Méndez de Almeida” (OLMA), adscrito a la Provincia Jesuita de Brasil.

des sociales y agresiones ambientales. Este concepto integra la Justicia Social con la Justicia Ambiental.

Tres dimensiones se deben toma en cuenta en este enfoque: el cuidado de la persona humana, que es el respeto a la Dignidad Humana; el cuidado de la sociedad, a través de políticas públicas dirigidas a superar la desigualdad y la pobreza; y el Cuidado del Medio Ambiente como nuestra “Casa Común”. Desarrollando este marco de análisis, el Padre Follman señala en cuanto a la dimensión del cuidado de la persona humana que en Brasil se está viviendo un clima de total descalificación del otro y una guerra declarada en contra de la diversidad, que hasta ha llevado al Ministro de Educación Nacional a afirmar que odia a las poblaciones indígenas. En el nivel de los actores políticos, hay toda una industria de noticias falsas dirigidas a destruir moralmente al oponente, a lincharlo en las redes sociales; y en el nivel popular, se ha trazado una verdadera política de apartheid agresivo y amenazador.

En cuanto a la dimensión ambiental, en el discurso gubernamental se ha impuesto el viejo concepto de explotación de los recursos naturales, sumado a la idea de que “hay que liberar a los indios para que sean como nosotros” y se pueda facilitar la ocupación de sus territorios ancestrales, para ponerlos al servicio de la economía de mercado. La llegada del COVID-19, lejos de afectar estas posiciones, ha sido aprovechada para seguir la agresión con el medio ambiente, mientras la vida cotidiana de los sectores populares discurre entre la pobreza, la carencia de servicios, el déficit habitacional y la insalubridad, que choca con la promoción, a través de los medios de comunicación, de una cultura del lujo y del desperdicio, que además de injusta, degradada la relación de los seres humanos con el ambiente.

En la dimensión del cuidado de la sociedad, se imponen las ideas neoliberales de los círculos financieros, un modelo extrativista salvaje y el desmantelamiento de las políticas sociales, tratando de naturalizar las desigualdades sociales en un ambiente negacionista del conocimiento. Frente a la protesta social, el gobierno apuesta por las milicias armadas: grupos violentos que el Presidente Bolsonaro ha calificado como “gente de bien”, asumiendo un total desprecio por los valores republicanos.

Con este marco conceptual, el Dr. Lacerda inició su análisis partiendo de una breve visión de la historia del Brasil, para señalar que el racismo y el latifundismo son dos pilares de la estructura económica y social colonial que aún persisten en el país y han estado presentes en los cuatro momentos fundamentales de la

En la dimensión del cuidado de la sociedad, se imponen las ideas neoliberales de los círculos financieros, un modelo extrativista salvaje y el desmantelamiento de las políticas sociales, tratando de naturalizar las desigualdades sociales en un ambiente negacionista del conocimiento. Frente a la protesta social, el gobierno apuesta por las milicias armadas grupos violentos que el Presidente Bolsonaro ha calificado como “gente de bien”, asumiendo un total desprecio por los valores republicanos.

historia económica de Brasil: el periodo colonial de explotación del “Palo de Brasil”, el “ciclo del oro”, la economía del café y el ciclo del caucho. Y han sobrevivido a las transformaciones económicas y sociales del siglo XX, hasta llegar a la actualidad con el extrativismo y los agro-negocios.

En lo político, Brasil es un país con una democracia muy frágil, donde el militarismo ha estado siempre presente limitando las libertades públicas y el ejercicio de la participación ciudadana. Luego de las experiencias vividas entre 2002 y 2016 con los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Rousseff, con los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro llega nuevamente al poder un sector de la derecha brasileña, neoliberal, vinculada a los agro-negocios, en alianza con los dueños de los grandes medios de comunicación, como Globo TV, que justifican la gran deforestación que ha vivido la selva amazónica desde el 2016 según datos aportados por el Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil, mediante a la disminución de la vigilancia y fiscalización forestal por parte de las autoridades gubernamentales.

En este momento, los conflictos socio-ambientales han tomado mucha fuerza, pero los tres poderes que conforman el Estado están fuertemente intervenidos por el sector de los agro-negocios y del extractivismo, empezando por el poder ejecutivo en manos de Bolsonaro, quien apoya el armamentismo de los sectores latifundistas para imponer su violencia en el mundo rural. En el Congreso se han creado el Frente Parlamentario Agropecuario y el Frente Armamentista, para frenar toda iniciativa de defensa de los Derechos Humanos y del Medio Ambiente.



La pandemia del COVID-19 ha sido aprovechada por el gobierno para hacer reformas legales, sin consulta, en los sectores de la educación y la salud, y hay un proceso de privatización de las empresas del Estado, con una progresiva militarización del gobierno en todos sus niveles.

Ante esta realidad, OLMA, como engranaje de la Red de Centros Sociales Jesuitas en el Brasil, viene promoviendo la elaboración conjunta de una agenda estratégica de convergencia entre los sectores populares y comunitarios que hoy están a la cabeza de las luchas socio-ambientales, como los movimientos indígenas, los ambientalistas, los afrodescendientes, los movimientos sociales urbanos que resisten los efectos del neoliberalismo y la exclusión social, en las siguientes áreas de actuación: i) Defensa de los derechos de los pueblos tradicionales, ii) Economía solidaria y agricultura familiar, iii) Educación para las relaciones étnico-raciales, iv) Diálogo inter-religioso, v) Educación popular, vi) Género, vii) Incidencia sobre las políticas públicas, viii) Juventudes, y ix) Migraciones y refugiados.

Brasil es un país en riesgo por los efectos sociales del neoliberalismo y las agresiones al medio ambiente,

situación agravada por el COVID-19 y la negligencia del propio Presidente que ha negado el peligro de esta enfermedad, mientras la pandemia se ha extendido por el territorio, colocando al país entre los más contagiados del mundo. Mientras Bolsonaro cuenta con el respaldo de grupos empresariales, sectores conservadores y de las iglesias pentecostales, que tienen gran influencia en los sectores populares, como la Iglesia Universal Reino de Dios, la Iglesia Católica protagoniza una “coyuntura eclesial” que la lleva a ocupar su espacio de lucha en el mundo popular, al lado de los nuevos liderazgos sociales, con propuestas cercanas a las necesidades de la gente y a un futuro donde la lucha por la Justicia Socio-Ambiental ocupa un puesto de gran trascendencia, no solo para el país y el continente, sino para el mundo, ya que la Amazonía, como espacio de vida del planeta, está amenazada y, con ella, los pueblos y culturas ancestrales que allí habitan.



<https://www.youtube.com/watch?v=1K2stwXjwj8>

VENEZUELA: CRISIS SOCIAL Y CONFLICTO POLÍTICO



Para la opinión pública, la situación de Venezuela se entiende como un conflicto político. El año 2019 comenzó con cambios que parecían inminentes: el diputado Juan Guaidó, asumiendo la presidencia de la Asamblea Nacional y Nicolás Maduro en la presidencia de la República, producto de unas cuestionadas elecciones realizadas en el 2018, el tema de la ayuda humanitaria en la frontera, el gran apagón nacional, el intento de alzamiento militar de abril, la visita de la Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y las fallidas negociaciones entre gobierno y oposición, en Oslo y Barbados. A final de año, Maduro siguió en Miraflores y aquellos cambios que se anunciaron no sucedieron

Juan Salvador Pérez¹

En un artículo publicado en diciembre del 2019, por la revista *Foreign Policy*, la crisis venezolana aparece como uno de los 10 conflictos más importantes para el 2020. En ese estudio se señala que el país está sometido a un conflicto político, polarizado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó. El planteamiento central del ponente es que el conflicto en Venezuela no es político sino social y si se hace un diagnóstico equivocado, el tratamiento será equivocado, lo cual tendría efectos en millones de venezolanos que hoy están sufriendo.

Para fundamentar el carácter social del conflicto venezolano, el ponente cita un artículo de Anitza Freitez publicado en el *Vatican News*, donde destaca como indicadores: el acelerado empobrecimiento del país (luego del *boom* petrolero 2004-2012), la inseguridad

¹ En el "Análisis de la Realidad de América Latina y El Caribe: caso Venezuela" la exposición inicial le correspondió al abogado y politólogo Juan Salvador Pérez, Director de la Revista SIC del Centro Gumilla, centro social de la Compañía de Jesús en Venezuela.

alimentaria, el retroceso en la esperanza de vida de los venezolanos, el retroceso educativo, la inseguridad ciudadana, el desempleo y la migración forzada de más de 4 millones de venezolanos a países vecinos.

Sin embargo, para la opinión pública, la situación de Venezuela se entiende como un conflicto político. El año 2019 comenzó con cambios que parecían inminentes: el diputado Juan Guaidó, asumiendo la presidencia de la Asamblea Nacional y Nicolás Maduro en la presidencia de la República, producto de unas cuestionadas elecciones realizadas en el 2018, el tema de la ayuda humanitaria en la frontera, el gran apagón nacional, el intento de alzamiento militar de abril, la visita de la Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y las fallidas negociaciones entre gobierno y oposición, en Oslo y Barbados. A final de año, Maduro siguió en Miraflores y aquellos cambios que se anunciaron no sucedieron.

En este año 2020, la oposición llegó dividida a la elección de la directiva de la Asamblea Nacional. Sin embargo, Guaidó salió victorioso y luego de una gira mundial, donde fue recibido por líderes y gobernantes de Europa y fue ovacionado en el Congreso de los Estados Unidos, su liderazgo se reimpulsó. En marzo, cuando el gobierno de los Estados Unidos publica una lista de miembros del alto gobierno de Maduro señalados como narcotraficantes, aparece la pandemia del COVID-19. En ese contexto, el 13 de marzo se decreta un Estado de Emergencia y una cuarentena social que, para fines de mayo, coloca a Venezuela entre los países menos afectados. Sin embargo, ¿qué pasaría si no se logra contener el factor pandémico con todos los protocolos seguidos?

Frente a una pandemia que ha golpeado tan duramente a los países más desarrollados del planeta, el ponente se pregunta: ¿hay capacidad en el sistema de salud para responder a una epidemia de alto contagio?, ¿tenemos capacidad para recuperarnos? Estas son preguntas que atormentan al venezolano común.

Los protagonistas en esta coyuntura política son Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Maduro, a pesar de su caída en las encuestas y el cuestionamiento internacional, cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de aliados como China, Rusia y Turquía. Guaidó tiene en su haber el reconocimiento internacional y capacidad de convocatoria popular como líder de la oposición.²

El segundo aspecto, es que la crisis está en la cancha, jugando como un actor. Jared Diamond, que compara la crisis de los países con la de las personas, señala que lo primero es reconocer que se está en crisis, para poder asumir responsabilidades en la solución del problema.

Y lo tercero es que la sociedad civil cuenta con iniciativas dirigidas a buscar soluciones, desde la reconciliación hasta la solicitud de tregua entre gobierno y oposición, y hay voces disidentes dentro del oficialismo que advierten de la necesidad de un gobierno de unidad para atender la crisis. Igualmente, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, Guaidó y el mismo Maduro hablan, cada uno, de buscar acuerdos frente a la emergencia. Eso implica que debemos dar respuestas desde todos los sectores gubernamentales, políticos, sociales, económicos.

En consecuencia, para el ponente, hay una coincidente conveniencia de que esta es una oportunidad casi única de que el país pueda incorporarse a la senda de la reconciliación. Si los actuales protagonistas no asumen su responsabilidad, entonces les corresponderá a otros dar respuestas.

Según el ponente, hay muchas formas de pasar a la historia. Desde formas como las que relata Jorge Luis Borges en *La historia universal de la infamia*, hasta llegar a historias exitosas como la protagonizada por Jaruzelski y Walesa, en Polonia; Pinochet y Aylwin, en Chile; y Mandela y de Klerk, en Sudáfrica. Ellos se entendieron, superaron el conflicto político y lograron darle un vuelco para enfocarse en el conflicto real en esos momentos.

Las preguntas formuladas permitieron al ponente precisar la necesaria participación de la sociedad civil organizada que ha venido desarrollando actividades dirigidas a promover el entendimiento, por la urgencia que está viviendo la población. Tomando como ejemplo a Mandela, hizo énfasis en que los actores políticos deben asumir con firmeza el camino del entendimiento y la reconciliación. En ese sentido, el papel de la Iglesia, con su mensaje de paz, es de fundamental importancia, así como la labor de cada persona simpatizante del gobierno o la oposición que entiende que la solución a los problemas que confronta el país está por encima del enfrentamiento político.

Es muy importante entender que el actual conflicto político es de posiciones antagónicas, en medio de una crisis social agravada por la pandemia. Citando a Albert

² Este escenario ha cambiado a partir de enero de 2021, con la elección de una nueva Asamblea Nacional oficialista, sin la participación de la oposición mayoritaria liderada por Guaidó y una alta abstención electoral. En 2021, Venezuela amanece con

dos Asambleas Nacionales en conflicto y un Presidente de la República cuestionado por fraude electoral en las elecciones de 2018 y desconocido por una gran cantidad de países del mundo.



Hirschman, señala tres opciones a seguir: te resignas, te vas del país o te conviertes en actor. Y eso es lo que debe asumir la sociedad civil organizada, ser actor.

Ante la conducta del gobierno de continuar la persecución política de los líderes de la oposición y de censurar la prensa independiente, el ponente plantea que es necesario entender que la tregua social vs la arremetida gubernamental es el tema central de cualquier acuerdo, ya que el diálogo hace falta cuando los actores han perdido control sobre la situación. Citó el ejemplo de los tratados de Bolívar y Morillo, en Santa Ana de Trujillo, en 1820.

Un último interrogante giró en torno a lo visible y lo no visible de la realidad social, para preguntar dónde estaría lo no visible del conflicto. El caso de Polonia sirvió como ilustración, ya que la liberación de Walesa de prisión, en 1981, se debió a la intervención de un actor no visible: el papa Juan Pablo II. Para finalizar confiesa que le encantaría saber qué es lo no visible en el conflicto venezolano, pero, aunque no lo sabe, lo cierto es que las cosas ocurren en el plano de lo visible y lo no. El ponente admitió que hay actores no visibles en todo este conflicto, pero son muy difíciles de identificar

Se cerró la sesión con un llamado a la reconciliación y a la negociación como vía de solución a los problemas de los venezolanos.

Es que la sociedad civil cuenta con iniciativas dirigidas a buscar soluciones, desde la reconciliación hasta la solicitud de tregua entre gobierno y oposición, y hay voces disidentes dentro del oficialismo que advierten de la necesidad de un gobierno de unidad para atender la crisis. Igualmente, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, Guaidó y el mismo Maduro hablan, cada uno, de buscar acuerdos frente a la emergencia. Eso implica que debemos dar respuestas desde todos los sectores gubernamentales, políticos, sociales, económicos.



<https://www.youtube.com/watch?v=ZJNCmTGuHPU>



NICARAGUA: AUTORITARISMO Y REPRESIÓN

María López Vigil y Arturo Grigsby¹

19

En el caso nicaragüense, el boom económico que vivió el país entre el 2007 y 2016 fue producto del apoyo financiero venezolano, y le permitió a Ortega generar un modelo económico corporativo con apoyo de la empresa privada que se benefició de la exportación de productos tradicionales a Venezuela, aplicando, además, una política de gasto social hacia los sectores populares que le sirvió de base para implantar un modelo político centralizador y autoritario.

El economista Arturo Grigsby abordó la situación nicaragüense partiendo del análisis de las causas y consecuencias de la Rebelión de Abril de 2018, cuyo detonante fue las protestas por la reforma de la Seguridad Social, y que degeneró en lo que se ha calificado como la “Gran Matanza de Abril”. En esa ocasión sólo en asesinatos perpetrados por parte las fuerzas de seguridad nicaragüense se elevó a 328 personas. La pregunta es ¿qué pasó con la Rebelión de Abril? Para responder a esa inquietu, Grigsby se remonta a la década de los años 80 con el triunfo de la Revolución Sandinista, entre cuyos líderes se encontraba el actual presidente Daniel Ortega.

Ortega gana las elecciones en 1984, pero la oposición recupera el poder en 1990 con el triunfo electoral de Violeta Chamorro. Así se abrió la puerta para el establecimiento de un programa económico neoliberal, cuyos nefastos efectos económicos y sociales explican el triunfo de Daniel Ortega nuevamente en 2007, quien pone en práctica un modelo económico conocido en Nicaragua como ‘corporativista’, en alianza con el sector privado nicaragüense.

¹ Para el “Análisis de la Realidad de América Latina y El Caribe: caso Nicaragua”, los expositores invitados al foro organizado por la CPAL, bajo la conducción del politólogo Piero Trepiccione, Coordinador de la Red de Centros Sociales de la CPAL, fueron los analistas María López Vigil y Arturo Grigsby.



Los países centroamericanos vivieron hasta la década de los años 70 de la agro-exportación, con formas de gobierno en su mayoría dictatoriales, y que terminaron en guerras civiles y revoluciones, como la sandinista. En los años 90, la región centroamericana, con excepción de Costa Rica, empezó a sufrir cambios en su economía ya que, junto a la exportación de productos agrícolas, se instaló una industria textil ‘maquiladora’ y aparecieron las remesas de dinero procedentes de los Estados Unidos. Sólo Costa Rica logra combinar sus exportaciones agrícolas con una industria informática y de equipos médicos y con el turismo ecológico, contando con inversión extranjera.

En el caso nicaragüense, el *boom* económico que vivió el país entre el 2007 y 2016 fue producto del apoyo financiero venezolano, y le permitió a Ortega generar un modelo económico corporativo con apoyo de la empresa privada que se benefició de la exportación de productos tradicionales a Venezuela, aplicando, además, una política de gasto social hacia los sectores populares que le sirvió de base para implantar un modelo político centralizador y autoritario. En este período, Ortega logra el control de los Poderes Públicos, reformó la Constitución para garantizar su reelec-

La persecución desatada a partir de 2018 ha llevado al exilio a políticos, dirigentes sociales, defensores de los derechos humanos y a miembros de la Iglesia Católica, incluyendo a un Obispo; también, a actos de intolerancia religiosa, como la quema de la imagen de Cristo conocida como “La Sangre de Cristo”, el pasado 31 de julio de 2020.

ción e intervino con acusaciones de fraude los procesos electorales, ejerciendo una represión sistemática contra la oposición política y criminalizando cualquier forma de disidencia; contó para ello con el apoyo del Ejército, la Policía y otros grupos paramilitares afectos al sandinismo. Ese modelo económico y político es el que entra en crisis en el 2018.

La periodista María López Vigil inició su participación a partir del triunfo electoral de Ortega en 2007, insistiendo en la importancia no solo económica sino también política que tiene Venezuela en el gobierno de Ortega en ese periodo. El apoyo de Venezuela le permitió a Ortega imponer un gobierno autoritario, logrando un control estratégico de la Asamblea Nacional mediante la destitución, a través del Poder Judicial, de 28 diputados opositores electos en 2011. Este acontecimiento afianzó el poder de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, quien ostenta el cargo de vicepresidenta de la república, y le dio al gobierno un carácter cada vez más autoritario y represivo, en un país que, además, estaba sometido a una feroz polarización que impedía el debate político y la convivencia democrática. Recordó que el pueblo nicaragüense venía de una tradición dictatorial somocista, mentalidad que aún permanece en muchos sectores sociales y políticos, y que la Revolución Sandinista no consiguió generar una cultura democrática emergente y participativa.

Así las cosas, las protestas de abril de 2018 se transformaron en una verdadera rebelión cívica contra el sandinismo y del gobierno de Ortega; y éste, lejos de abrir un camino político para buscar acciones de resolución prefirió tomar el camino de la represión contra los manifestantes, causando un verdadero trauma en la sociedad nicaragüense dado el grado de violencia con la que los cuerpos de seguridad del Estado, junto a grupos paramilitares sandinistas, respondieron a las de-

mandas de la población; hubo un alto saldo de muertos y de heridos. La persecución desatada a partir de 2018 ha llevado al exilio a políticos, dirigentes sociales, defensores de los derechos humanos y a miembros de la Iglesia Católica, incluyendo a un Obispo; también, a actos de intolerancia religiosa, como la quema de la imagen de Cristo conocida como “La Sangre de Cristo”, el pasado 31 de julio de 2020.

¿Puede el régimen de Ortega ser considerado ‘de izquierda’? En el terreno económico, lo que Ortega ha hecho es gestionar, con los recursos que le aportó Venezuela, un modelo corporativo de alianza con un sector privado, que ya venía del periodo anterior, generando su propio grupo empresarial beneficiario del comercio de exportación con Venezuela. En lo político, se trata de un gobierno autoritario que ha preferido tomar el camino represivo para mantenerse en el poder.

En cuanto a las fuerzas de oposición, ni los diversos grupos existentes, ni la disidencia sandinista cuentan con un proyecto alternativo.

En Nicaragua existe un interés muy claro de manipular, desde la vicepresidencia, el sentimiento religioso del pueblo, con un mensaje que pretende colocar al gobierno como elegido por Dios, y que a la vez ataca a la Iglesia Católica y agrede símbolos cristianos (tradicionalmente asociados con el catolicismo) como la imagen de ‘La Sangre de Cristo’.

Las sanciones del gobierno de los Estados Unidos no han tenido efectos. Delante de las elecciones previstas para 2021 Ortega está tratando de resistir a la presión internacional y a las denuncias por violación de los derechos humanos. El futuro es opaco, no se ven salidas; lo cierto es que Nicaragua no podrá salir sola de esta situación y que requiere el apoyo y la solidaridad de los gobiernos democráticos del mundo.





EL SALVADOR:

NAYIB BUKELE Y LA DEMOCRACIA MEDIÁTICA

Omar Serrano y Amparo Marroquín¹

Bukele llega al poder sin programa de gobierno, sin contacto presencial con los votantes y sin partido propio. Ganó con slogans como por ejemplo: “Cuando nadie roba, el dinero alcanza”, y continúa hoy gobernando con slogans. Si bien es un catalizador del descontento social, su gobierno, de clara orientación derechista, no es solución para la actual problemática salvadoreña

Bukele es un fenómeno político que ha logrado llegar a la presidencia de El Salvador porque ha sido, a la vez, el catalizador y el beneficiario del descontento social que persiste en ese país centroamericano que sufrió, entre 1980 y 1992, una terrible guerra civil, dejando un saldo de más de 70 mil muertos (la mayoría de la población civil), 10 mil desaparecidos, un millón de desplazados, un país empobrecido y fracturado socialmente; violencia en la que debemos incluir el asesinato de sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) y de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Los acuerdos de paz de 1992 se centraron en lo político, pero los problemas económicos y sociales quedaron pendientes; las promesas de progreso y bienestar para las mayorías no se materializaron. La incorporación de la guerrilla a la vida política fue un logro muy importante, pero se hizo a cambio de la impunidad en la que quedaron los delitos de lesa humanidad en que incurrió el gobierno militar, y las causas sociales de la guerra no se atendieron. Cerrado el conflicto, los gobiernos del partido

¹ El “Análisis de la Realidad de América Latina y El Caribe: caso El Salvador”, contó con la moderación de Alejandro Rodríguez y, como ponentes, Omar Serrano, filósofo y teólogo, actualmente Vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana (UCA), y Amparo Marroquín, periodista y doctora en Filosofía Iberoamericana.

ultraderechista ARENA impusieron, por espacio de 20 años, una política neoliberal, que debilitó la actuación del Estado en la reconstrucción del país, y esos errores son los que hoy se están pagando.

Los gobiernos de ARENA fracasaron en su intento de hacer de El Salvador una economía ‘maquiladora’ y de transformar el país en un paraíso fiscal, dolarizando la economía. Este fracaso explica el triunfo electoral, en 2009, del FMLN, el cual llega al poder bajo las banderas de un cambio radical; cambio que tampoco se produjo por falta de capacidad de gobernar y de coraje para asumir reformas sustantivas, cayendo en los vicios de la vieja política, sobre todo de la corrupción. Esto llevó a la población no sólo a una pérdida de confianza en los partidos políticos, sino en la democracia, aumentando nuevamente la violencia y apareciendo un sentimiento de tolerancia hacia regímenes autoritarios.

Es en ese contexto, que aparece la figura de Nayib Bukele, quien obtiene, en 2019, un aplastante triunfo electoral. Bukele llega al poder sin programa de gobierno, sin contacto presencial con los votantes y sin partido propio. Ganó con *slogans* como por ejemplo: “Cuando nadie roba, el dinero alcanza”, y continúa hoy gobernando con *slogans*. Si bien es un catalizador del descontento social, su gobierno, de clara orientación derechista, no es solución para la actual problemática salvadoreña.

La Dra. Amparo Marroquín, abordó en su presentación la narrativa de construcción de Nayib Bukele como un líder populista de extrema derecha. Comenzó citando a Esteban Magnani, quien en un estudio denominado *Radiografía de la Derecha*, publicado en agosto de 2020, señala que lo novedoso de la nueva derecha política a nivel global es el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales para detectar en la población frustraciones, temores, rasgos de personalidad y deseos, que le sirven para crear corrientes de opinión pública y manipular las emociones de los votantes.

Habiendo logrado la hegemonía comunicacional en las redes sociales, Bukele ha venido construyendo exitosamente la imagen de un héroe cuyo ciclo comienza con el joven guerrero que conquista la Alcaldía de San Salvador, que luego sufre la persecución política cuando es expulsado del FMLN, y que en las elecciones de 2019 se presenta como mesías que se enfrenta a todos los poderes tradicionales. Al ganar la presidencia su estrategia es proyectarse como un profeta que, de la mano de Dios, llevará a su pueblo a la felicidad, salvando los obstáculos que le colocan sus enemigos, es decir: las fuerzas polí-

Habiendo logrado la hegemonía comunicacional en las redes sociales, Bukele ha venido construyendo exitosamente la imagen de un héroe cuyo ciclo comienza con el joven guerrero que conquista la Alcaldía de San Salvador, que luego sufre la persecución política cuando es expulsado del FMLN, y que en las elecciones de 2019 se presenta como mesías que se enfrenta a todos los poderes tradicionales. Al ganar la presidencia su estrategia es proyectarse como un profeta que, de la mano de Dios, llevará a su pueblo a la felicidad, salvando los obstáculos que le colocan sus enemigos, es decir: las fuerzas políticas tradicionales tanto de izquierda como de derecha, y situándose por encima de las instituciones del Estado salvadoreño

ticas tradicionales tanto de izquierda como de derecha, y situándose por encima de las instituciones del Estado salvadoreño.

La hegemonía que busca instaurar Bukele en El Salvador se basa en una estrategia comunicacional dividida en cinco historias narrativas:

1. el guerrero indignado, pero líquido, que aspira no ser catalogado ni de izquierda ni de derecha. Su escenario es la polarización entre los buenos que lo siguen y los malos que lo critican y que califica como “los mil veces malditos”. Esta narrativa es la que alimenta el libro que se acaba publicar con el título de *El guerrero indignado*, que viene a ser una especie de biografía oficial.
2. La segunda historia narrativa es que Bukele gobierna en nombre de Dios, como su intermediario, explotando con ello los sentimientos religiosos del pueblo salvadoreño a través del uso de símbolos e imágenes con ese fin. Frente a la



pandemia del Coronavirus, su estrategia fue convocar la celebración del Día Nacional de la Oración.

3. La tercera historia es la del mito del amor romántico que hace pública e instrumentaliza su propia historia de su noviazgo y matrimonio, y presentándose como modelo que promueve los valores de la familia tradicional cristiana, masculina y conservadora.
4. La cuarta historia es la “Marca Bukele”, que corresponde a la venta de una imagen comercial donde predomina la ostentación y el lujo como referentes a seguir, especialmente por los jóvenes. Bukele no tiene seguidores políticos sino *fans* y consumidores de un producto comercial.

Y, finalmente, (e) el posicionamiento de un autoritarismo diseñado como espectáculo, al estilo de un *reality show*, con su guion: un pueblo sufrido, sometido a un conflicto, que encuentra a un líder que viene a salvarlo por inspiración divina. En esa lucha contra el mal, tendrá que vencer miles de obstáculos, representados por los partidos tradicionales, pasando incluso por encima de las instituciones del Estado como la Corte Suprema de Justicia o la Asamblea Nacional con sus leyes que le impiden actuar prontamente en favor de su pueblo.

El Salvador es un país con una arraigada cultura autoritaria, con un sistema institucional

El posicionamiento de un autoritarismo diseñado como espectáculo, al estilo de un reality show, con su guion: un pueblo sufrido, sometido a un conflicto, que encuentra a un líder que viene a salvarlo por inspiración divina. En esa lucha contra el mal, tendrá que vencer miles de obstáculos, representados por los partidos tradicionales, pasando incluso por encima de las instituciones del Estado como la Corte Suprema de Justicia o la Asamblea Nacional con sus leyes que le impiden actuar prontamente en favor de su pueblo.

que no tiene la capacidad de servir de contrapeso a un presidente (y su círculo familiar) que representa una élite empresarial y financiera con conexiones en las Fuerzas Armadas y el crimen organizado; así se pone en riesgo la supervivencia del propio sistema democrático salvadoreño. Las próximas elecciones parlamentarias serán fundamentales ya que si Bukele obtiene la mayoría tendría el camino libre para fortalecer su proyecto autoritario. Si no es el caso es posible entrar en un escenario de un gobierno híbrido. El papel que puede jugar una comunidad internacional bien informada, es de gran importancia en esta lucha por la defensa de la democracia salvadoreña.



<https://www.youtube.com/watch?v=8TxRQn5mwM8>

COLOMBIA: EXTRACTIVISMO Y DERECHOS HUMANOS

Jenny Paola Ortiz
y Juan Pablo Guerrero Home¹

Se puede hablar de un verdadero etnocidio de los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes que habitan tradicionalmente en esos territorios, (el Chocó, la Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta) y de un ecocidio por la magnitud de intervenciones que afectan el ambiente y los recursos naturales, en algunos casos de manera irreversible, contribuyendo a una mayor crisis climática por los desequilibrios que se genera en los ecosistemas

El análisis presentado tuvo dos enfoques complementarios: Jenny Paola Ortiz, expuso el tema del extractivismo y los derechos humanos en Colombia, problema que hoy está presente en todo el continente, mientras Juan Pablo Guerrero se centró en los elementos desestabilizadores de la paz en el departamento del Chocó.

Para la Lic. Ortiz, el auge de las economías extractivas es ya un problema latinoamericano que se puede apreciar en proyectos como el Arco Minero en Venezuela, la deforestación de la Amazonía brasileña por empresas agroindustriales y ganaderas, los proyectos de explotación de minerales, petróleo y gas en Ecuador y Perú, etc. Es un problema que exige una mirada global y comparada. Su interés inmediato es caracterizar ese proceso en Colombia, en un escenario dominado por un conflicto armado de larga duración, múltiples intentos y procesos de paz, la presencia del narcotráfico y la violación sistemática de los derechos humanos.

El “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022” promulgado por el gobierno actual aceleró la locomotora extractiva, desconociendo los derechos de las autonomías territoriales y dejando de lado la defensa del ambiente y los derechos humanos. Desde los dos gobiernos de Álvaro Uribe hasta llegar a la presidencia de Iván Duque, el extractivismo se ha transformado en un modelo de negocio que involucra la alianza entre

¹ El “Análisis de la Realidad de América Latina y El Caribe: caso Colombia” contó con la participación de dos investigadores del CINEP: la Lic. Jenny Paola Ortiz, responsable de la Línea de Interculturalidad; y el politólogo Juan Pablo Guerrero Home, responsable de la Línea de Gestión Territorial en el Pacífico. La moderación estuvo a cargo del politólogo Piero Trepiccione.

Las poblaciones afectadas no ven avances en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada en 2011; esa ley ha generado 34 procesos de restitución de tierras (20 de pueblos indígenas y 14 de comunidades afrodescendientes) para un total de un millón de hectáreas demandadas, y apenas se han restituido 150 mil. Esto da idea de la falta de garantías en la defensa de los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, que no ven que el Estado esté atento ante sus demandas

grandes empresas mineras transnacionales con sectores de gobierno nacional, regional y local, así como la presencia de grupos delictivos e irregulares que hacen vida en los territorios hoy afectados por la explotación de hidrocarburos, carbón, minerales preciosos como el oro, minerales de uso estratégicos y materiales para obras de infraestructura. En ese sentido, se trata de la inserción en el marco legal del Estado de un modelo de explotación de los recursos naturales con alto costo ambiental, social y económico, en el largo plazo.

La vinculación entre los proyectos extractivistas localizados en “zonas estratégicas” del país y la violación sistemática de los derechos humanos se evidencia en el aumento de la violencia en esos territorios donde se ha multiplicado el asesinato de dirigentes locales, líderes indígenas, ambientalistas y activistas de los derechos humanos. En 2019, la cifra llegó a 212 muertes, y hasta la fecha (12 de noviembre) se contabilizaban 64 asesinatos en el año 2020.

Esta situación es producto de la reactivación del conflicto armado al paralizarse el proceso de paz firmado por el Estado colombiano con las FARC y la suspensión de las negociaciones con el ELN. Como resultado de ello han sido asesinados 78 excombatientes de la



guerrilla y se han llevado a cabo 70 masacres en sitios donde se ha activado nuevamente los grupos paramilitares, el narcotráfico y la disidencia de las FARC, especialmente en los territorios donde impera el extractivismo legal e ilegal.

La llegada de la COVID-19, ha afectado a la economía del país por la paralización de las actividades, pero en el caso de los proyectos mineros estos han seguido su curso. Ese proceso de extracción de recursos naturales compromete el futuro del país por sus efectos ambientales locales y porque favorece el cambio climático al afectar grandes extensiones de selvas y contaminar los ríos, fenómeno que ya se puede apreciar también en otros países latinoamericanos.

En el caso colombiano, las áreas más afectadas son la costa del Pacífico, el Caribe, la Orinoquia y el departamento de Antioquia. Allí se puede hablar de un verdadero etnocidio de los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes que habitan tradicionalmente en esos territorios, (el Chocó, la Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta) y de un ecocidio por la magnitud de intervenciones que afectan el ambiente y los recursos naturales, en algunos casos de manera irreversible, contribuyendo a una mayor crisis climática por los desequilibrios que se genera en los ecosistemas. Ante esta compleja problemática nos encontramos con una administración de justicia intervenida por los poderes delictivos para evitar las sanciones y actuar con total impunidad. Frente a ello, conviene activar acuerdos de justicia internacional para garantizar los derechos humanos y ambientales.

En seguida Juan Pablo Guerrero completó esta visión general, con una presentación de la situación que se vive concretamente en el Departamento del Chocó (costa pacífica colombiana), señalando los factores que obstaculizan la construcción de Paz en esa región donde habitan comunidades afrodescendientes. Lo primero que destaca es que el Chocó es un territorio en disputa entre grupos armados, el narcotráfico y el gobierno, con altos índices de pobreza, una alta tasa de desnutrición infantil, bajo ingreso per cápita y una realidad de exclusión y precariedad, agudizado por la pandemia y el conflicto armado. De una población departamental de 475 mil personas, 58,7% vive en situación de pobreza.

En el Chocó, las alcaldías (los municipios) están minadas por el peculado y la corrupción. Entre 2011 y 2019 la Procuraduría General de la Nación contabilizó 679 denuncias de delitos contra el patrimonio público en las 30 alcaldías. Por otro lado, una gran parte de la población vive en permanente desplazamiento dentro y fuera del departamento, movimiento que entre 2010 y 2019 se elevó a 145 mil personas, sometidas a vivir en condiciones cotidianas de emergencia humanitaria. En el Chocó el 30 % de la población ha sido desplazada por el conflicto armado y ha sido testigo de un sistemático proceso de despojo, usurpación y compra masiva de tierras para proyectos de extracción minera, desarrollo de la ganadería extensiva y la explotación de la Palma aceitera.

Mientras tanto, las poblaciones afectadas no ven avances en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada en 2011; esa ley ha generado 34 procesos de restitución de tierras (20 de pueblos indígenas y 14 de comunidades afrodescendientes) para un total de un millón de hectáreas demandadas, y apenas se han restituido 150 mil. Esto da idea de la falta de garantías en la defensa de los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, que no ven que el Estado esté atento ante sus demandas.

Al contrario, se aprecia más bien un proceso de militarización con la presencia de actores armados ilegales que controlan el territorio del departamento como poderes de facto frente a las instituciones del Estado, y una acelerada expansión de los cultivos ilícitos que han transformado zonas del departamento en corredores del narcotráfico. A ello se agrega la extracción de plata, oro y platino gracias a la aprobación de 174 títulos de explotación minera que cubren una extensión de 350 mil kilómetros del departamento. Todos estos factores, alejan la paz en el Departamento del Chocó, replicando en este territorio la realidad del entero territorio colombiano donde el extractivismo se ha transformado en un factor de desestabilización que amenaza el desarrollo sostenible del país y al mismo Estado de Derecho.



A large, stylized number '3' is the central focus. It is rendered in a dark blue color with a white outline. The number is positioned on the left side of the page, partially overlapping an orange vertical bar and a green rounded rectangle. The orange bar is on the left, and the green rectangle is on the right, containing the title text.

LA DESIGUALDAD,
LA MOVILIZACIÓN
SOCIAL Y LAS
MEDIDAS DEL
GOBIERNO
COLOMBIANO
EN TIEMPOS DE
PANDEMIA



Luis Guillermo Guerrero Guevara y Marco Fidel Vargas Hernández¹

29

Los efectos de la pandemia en Colombia son desastrosos: recesión, desempleo, incremento de la desigualdad, mayor endeudamiento de la clase media (medidas tales como el “día sin IVA” beneficiaron a los empresarios y endeudaron más a los ciudadanos), deterioro de las ciudades por locales y oficinas desocupadas, el confinamiento de niños, niñas y jóvenes para seguir sus clases virtualmente sin el componente de convivencia.

“Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino sólo un “nosotros”. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros”.

(Fratelli Tutti. No. 35. S.P. Francisco)

Efectos socioeconómicos de la pandemia y respuestas del gobierno

Una de las preocupaciones y de los deseos más pedidos por la gente en Colombia es llegar pronto al final de esta pandemia, dejando en el pasado todo referente de un coronavirus generador de

¹ Luis Guillermo Guerrero Guevara es el Director General del Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP/Programa por la Paz, centro social de la Compañía de Jesús en Colombia. Marco Fidel Vargas Hernández es el Subdirector de dicho Centro.

La narrativa de esperanza, tranquilidad y salvación, orquestada por el gobierno, los medios de comunicación y farmacéuticas, gira alrededor de la vacuna aprobada apresuradamente por la mayoría de los Estados, a pesar de los precarios estudios sobre la fabricación masiva, la entrega a tiempo de pedidos y la efectividad masiva de las mismas. Lo anterior, con la promesa de vacunar treinta millones de colombianos en el 2021

mucho sufrimiento, desigualdad y violencia. Pero la realidad es otra. En Colombia, a mediados del mes de febrero del 2021, el número de personas contagiadas va creciendo a más de dos millones doscientas mil y pasamos de los cincuenta y siete mil muertos. De los fallecidos, el 90% pertenece a familias pobres o muy pobres, clasificados así: el 31,5% es de bajo nivel o estrato 1, el 35,8% del estrato 2 y el 22,1% del estrato 3. Es una realidad donde mueren los pobres mientras aumenta el poder y enriquecimiento de los pocos ricos, al mismo tiempo que crece la violencia en los territorios más periféricos del país, porque el conflicto armado en el país no cesa.

En Colombia, el sistema económico montado, como en otros países del mundo, sobre la prioridad del fortalecimiento y la sostenibilidad de los bancos y de las grandes empresas que concentraron ganancias por 21 billones de pesos durante nueve meses pandemia, con el apoyo del Estado que invirtió mil billones de pesos a la banca, con un bajo interés del 1,75 %, mientras que las pequeñas y medianas industrias no tienen las ayudas del gobierno. El 63,3% de la población colombiana que vive del rebusque², después de 9 meses de confinamiento, sale a las calles en búsqueda de algún ingreso para sobrevivir, mientras que el desempleo, según datos del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) y la Escuela Nacional Sindical (ENS), está entre el 10% y el 18%, lo que revela que entre 2.5 millones y 5 millones de puestos de trabajo se perdieron. La pobreza en Colombia, según el centro de estudios económicos Fedesarrollo, llegó a un nivel de entre 47% y 49% por la pandemia, es decir que seis millones de personas en el país ingresarán a esta condición por la crisis del COVID-19. Ante este contexto, desde el Congreso Nacional, los sectores progresistas y los movimientos sociales levantan la bandera de la necesidad de un subsidio social de Renta Básica como una salida a la crisis de la salud y la pérdida de empleos formales que, como se dijo, llegó a cerca de 5 millones de personas.

Los efectos de la pandemia en Colombia son desastrosos: recesión, desempleo, incremento de la desigualdad, mayor endeudamiento de la clase media (medidas tales como el “día sin IVA” beneficiaron a los empresarios y endeudaron más a los ciudadanos), deterioro de las ciudades por locales y oficinas desocupadas, el confinamiento de niños, niñas y jóvenes para seguir sus clases virtualmente sin el componente de convi-

vencia. Una inflación, en el rubro de alimentos, del 4,6%, la imposibilidad de la vida social, el aumento de enfermedades mentales, la acentuación de la violencia intrafamiliar y, como resultado de la presión continua sobre las libertades individuales y sociales, la explosión social de manifestaciones, protestas sociales y movimientos populares que no aguantan más la medidas de confinamiento decretadas con el fin de aplanar la curva del primero y segundo pico de la pandemia, en los primeros meses de este año en curso.

Por su parte, los gobernantes han desnudado su incapacidad para gestionar la pandemia y la violencia. La lista de lo que no ha funcionado es larga. En primer lugar, la desarticulación entre el gobierno nacional, regional y local ha quedado al descubierto. En segundo lugar, el énfasis en el control más que en la prevención y tratamiento del virus ha demostrado la ineficiencia del sistema. El supuesto inicial fue: dada la letalidad del virus, es imperioso frenar la ratio del contagio³ para asegurar cupos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y evitar que la gente muera por falta de atención al llegar a una condición crítica de salud. Bajo ese criterio, los gobernantes empezaron a gestionar las medidas de confinamiento bien fuera apretándolas o relajándolas en virtud de la ratio de ocupación en la UCI. Es decir, a mayor ocupación, más medidas autoritarias de control, y a menos ocupación de UCI, más relajamiento en las medidas. En tercer lugar, la

3 En epidemiología, el número básico de reproducción, a veces llamado ritmo básico de reproducción o ratio reproductiva básica de una infección, es el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. Esta métrica es útil debido a que ayuda a determinar cuando una enfermedad infecciosa puede dar lugar a un brote epidémico serio.

lentitud para fortalecer la infraestructura médica es significativa en todo el país. Como consecuencia, en cualquier rebrote, el sistema de salud queda en riesgo de colapsar. En cuarto lugar, la ausencia de un sistema amplio y eficiente de educación, concientización y responsabilidad ciudadana en favor del cuidado de la vida y la salud, siguiendo las normas de higiene. Los esfuerzos quedan reducidos a un modelo autoritario de medidas represivas (multas, capturas, sellamiento de negocios, etc.) que ha demostrado sus limitaciones para el manejo de la crisis.

Finalmente, la narrativa de esperanza, tranquilidad y salvación, orquestada por el gobierno, los medios de comunicación y farmacéuticas, gira alrededor de la vacuna aprobada apresuradamente por la mayoría de los Estados, a pesar de los precarios estudios sobre la fabricación masiva, la entrega a tiempo de pedidos y la efectividad masiva de las mismas. Lo anterior, con la promesa de vacunar treinta millones de colombianos en el 2021. El gobierno, a partir de diciembre del

prioridad a las personas con mayores riesgos de enfermedades preexistentes, otros grupos de apoyo sanitario, maestros y Fuerzas Armadas y de Policía; posteriormente, grupos de personas entre los 16 y los 59 años y, finalmente, grupos como los reclusos, personal de vigilancia en cárceles, bomberos, socorristas de Cruz Roja y en general, cargos de menor exposición. Toda esta planificación se hace en orden a ofrecer tranquilidad a la gente, así tanto la efectividad de la logística y la transparencia como la capacidad de un Estado precario, desarticulado y fragmentado en el cumplimiento de los propósitos mayores sean cuestionables.

El dramático caso del personal sanitario y las respuestas del gobierno colombiano

Un caso dramático es la realidad del personal sanitario y el tratamiento que reciben de las instancias estatales y de gobierno en Colombia. En medio de esta compleja pandemia mundial, las personas trabajadoras de la salud tienen contratos laborales precarios, salarios cada vez más bajos y, en varias entidades, pasan hasta dos años y no se les paga.

El gremio de la salud no solo debe afrontar a diario la pandemia que nos agobia, también tienen que vérselas con los bancos, los arrendatarios, las empresas de servicios públicos y hasta las casas de cobranza. La situación económica de una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud es crítica: no tienen derecho a primas ni vacaciones ni cesantías, con largos turnos de servicio y un sin número de irregularidades laborales que, de manera increíble, existen en un sector que debería tener todas las garantías para trabajar bien en medio de semejante pandemia.



2020, aprobó provisionalmente la compra de la vacuna y empezaron los planes de vacunación masiva para la población de acuerdo a diversos criterios de priorización, según exposición del personal sanitario en la atención de primera fila, la población mayor de 80 años, luego personas entre los 60 a los 79 años con

La Federación Nacional de Sindicatos Médicos (Fecolmed) y sindicatos regionales de salud, han denunciado esta situación ante el presidente de la República, los ministros de salud y de trabajo, instancias del Estado como la Super Intendencia de Salud, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo; absolutamente a nadie le interesa el gremio

médico. Ante esta situación, las directivas sindicales dicen: “solamente en los programas diarios de televisión de las seis de la tarde, el presidente Ivan Duque y sus equipos de trabajo nos llaman héroes, dicen que estamos guerreando en primera línea. Si realmente les interesara, ¿no creen que ya nos deberían solucionar el problema?, pero no les interesa en absoluto, porque la salud no da votos”.

El Gobierno Nacional debe tomar cartas en el asunto y ver quién se está quedando con el dinero de la salud, si son las Empresas Prestadoras de Salud -EPS (que administra los recursos de la salud y que le cancela a las IPS) o son las Instituciones Prestadoras de Salud -IPS (que realizan la servicios de salud con su personal) o si son los mercaderes o ladrones de cuello blanco de la salud que hacen parte de la aplicación de la arquitectura legislativa del Congreso Nacional. Es un problema gravísimo porque la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras de la salud está contratada por precarias órdenes de prestación de servicios, supuestamente concertados con cooperativas que se convirtieron en sindicatos de papel, quedándose con los grandes recursos y que tercerizan y explotan a los trabajadoras y trabajadores de la salud. A pesar de que la ley dice que el talento humano en salud es un personal misional y que debe estar contratado única y exclusivamente de forma directa por el Estado, no se ha creado un régimen especial para el talento humano en salud, como lo tienen las Fuerzas Armadas o el gremio docente, de tal manera que no quede totalmente desamparado como quedó luego de entrar en escena la Ley Cien que privatizó la salud. Pero, lo peor, es que ni el Estado ni las empresas ni las instituciones de salud plantean alternativas, ni tampoco hacen eco de las soluciones que plantea el gremio trabajador de la salud.

Al respecto, en mayo del año pasado, con motivo de la Jornada Mundial de la Enfermería, el papa Francisco expresó:

La pandemia ha evidenciado muchas deficiencias en la atención sanitaria. Es urgente que los gobiernos inviertan en sanidad, como bien común primario, fortaleciendo las estructuras y designando más personal de salud. Es importante reconocer efectivamente el papel esencial que desempeña esta profesión para el bienestar de la sociedad. Por eso, tienen derecho y merecen estar más valorados e involucrados en los procesos que afectan a la salud de las personas. Es importante mejorar sus condiciones de trabajo y garantizar sus derechos para que puedan llevar a cabo su servicio con plena dignidad.

El aumento y la diversificación de la violencia política y social en Colombia y la inoperancia del Estado.

En el campo político, durante este año de pandemia, infortunadamente se detectó un aumento de las violaciones de los Derechos Humanos contra los líderes, lideresas populares y comunitarios, defensores/as de derechos humanos y excombatientes de la extinta organización insurgente de las FARC; violaciones que se dan, especialmente, por los procesos de la aplicación de la Ley **Víctimas** y Restitución de tierras (ley 1448 de la política pública para reparación de las víctimas del conflicto); victimizaciones que se da por la defensa de los territorios, en especial del situaciones relacionadas con la protección de patrimonios naturales y disputas del narcotráfico; adicionalmente, han reaparecido las masacres perpetradas por grupos guerrilleros y paramilitares por el dominio de los negocios ilícitos y lícitos en los territorios, lo que muestra la degradación de la violencia en medio de la pandemia, pero igualmente la incapacidad, la inoperancia e incluso las posibles relaciones de connivencia, en alguna regiones, entre grupos armados ilegales y sectores de fuerzas armadas y de policía del Estado.

En el 2020, la situación ha sido aún peor, pues sólo en el primer semestre de este año, 95 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas. A la ya lamentable situación de desprotección, se sumaron las vulnerabilidades adicionales que trajo la pandemia del COVID-19. Para las y los Defensores/as de Derechos Humanos no llegó sólo el riesgo del contagio de esta enfermedad mortal, también se limitaron sus posibilidades de defender los derechos humanos, y para sus agresores fue aún más fácil ubicarles en el confinamiento. La mayoría de estos asesinatos se siguen cometiendo, en las áreas rurales del país, contra las y los líderes comunales. Según la información regional más reciente, recogida por organizaciones defensoras e investigativas de Derechos Humanos en latinoamérica, tres de cada cuatro asesinatos de quienes defienden los derechos humanos en el mundo, se perpetraron en el continente americano, y más del 40% de estos asesinatos fue principalmente de personas que estaban defendiendo los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, en contextos de megaproyectos, restitución de las tierras arrebatadas en el marco del conflicto armado y contra quienes defienden el territorio, los pueblos indígenas, afrodescendientes, otros habitantes del campo y grupos en situación de vulnerabilidad.

Un caso dramático es la realidad del personal sanitario y el tratamiento que reciben de las instancias estatales y de gobierno en Colombia. En medio de esta compleja pandemia mundial, las personas trabajadoras de la salud tienen contratos laborales precarios, salarios cada vez más bajos y, en varias entidades, pasan hasta dos años y no se les paga

Estas cifras de asesinatos son realmente alarmantes. Pero este es sólo uno de los muchos otros tipos de agresiones que están enfrentando quienes defienden los derechos humanos en Colombia y en otras partes del continente. Los intentos de asesinato, las desapariciones forzadas, las intimidaciones y las amenazas de muerte, son sólo algunas de las muchas otras agresiones que han sufrido las y los Defensores de Derechos Humanos. Adicionalmente, cuando se trata de una defensora mujer, esas agresiones muchas veces van cargadas de violencia de género, ya sea de carácter sexual, que hace referencia al rol social que se espera de ellas como mujeres, o que ataca a sus seres más queridos — generalmente sus hijas— como una forma de atacarlas lo más fuerte posible, para tratar de silenciarlas.⁴

Movilización social, pandemia y respuestas estatales⁵

Podría pensarse que, en tiempos de confinamiento, la protesta social se retraería, pero la información registrada en la Base de Datos de Luchas Sociales del CINEP dice otra cosa: Abril es el mes de 2020 que presenta el mayor número de luchas sociales, superando la centena. Y el 43% del total de protestas del año tiene directa relación con las medidas tomadas o evitadas para enfrentar la pandemia. El 73% del total de las luchas sociales observadas fue protagonizada por pobladores urbanos, asalariados, trabajadores

independientes y pobladores rurales (campesinos y grupos étnicos). El 27% restante de las acciones contenciosas fue liderado por estudiantes, gremios, mujeres, reclusos, migrantes, jóvenes, víctimas y población LGBTI. El espectro de actores sociales es amplia y sus demandas también (y en este período, los migrantes se hicieron visibles a través de acciones reivindicativas). Las luchas enfocadas en cuestionar, rechazar o pedir políticas públicas específicas sumaron el 41% del total, la mitad de ellas en demanda de una política eficaz e inmediata de atención a poblaciones vulnerables en medio de la pandemia, otras muchas denunciaron la venta de lo que queda del patrimonio público o se opusieron a reformas laborales, tributarias, educativas, de seguridad social y de control del “orden público” que, de tiempo atrás, vienen empujando administración tras administración, pero que, en medio de este Gobierno, por decreto, se han querido tramitar de manera express o incluso imponer abiertamente.

Algunas protestas rechazaron la militarización de la vida cotidiana (impuesta bajo el argumento de luchar contra la COVID-19, la llegada, instalación y acción de un contingente militar estadounidense, la acción militar contra cultivadores de coca, la violencia en el manejo de la manifestaciones pre y durante cuarentenas), medidas de emergencia económica que han favorecido más a empresarios propios y extranjeros (como en el caso del billonario préstamo a Avianca), mientras se entregan migajas a asalariados, pymes, trabajadores independientes, desempleados y migrantes. Y otras se encaminaron a exigir el reconocimiento político de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, así como a pedir incentivos para la economía rural.

La exigencia de garantía de derechos ocupa el segundo lugar entre los motivos de las protestas de este año: el continuo asesinato, individual o colectivo, de líderes sociales, excombatientes, defensores de derechos humanos, jóvenes y mujeres; el rechazo a las violencias basadas en género y generaciones, las restricciones a la libertad individual, el requerimiento de la realización de los derechos a la salud, a la educación y al trabajo, movilizaron a los más diversos actores sociales del campo, la ciudad y las cárceles. El incumplimiento de pactos ocupó un tercer lugar entre las motivaciones de la protesta; y aquí sobresalen las luchas que denunciaron que los convenios que regulan el mundo del trabajo fueron violados abiertamente, bajo el pretexto de la crisis económica producto de la pandemia; que las acciones encaminadas a volver trizas y obstaculizar el

⁴ Tomado de Nancy R. Tapias Torrado “De la victimización a la acción trenzada: La alarmante situación de quienes lideran la defensa de los derechos humanos en Colombia”. *Revista Cien días Vistos por CINEP*. N° 100. Diciembre 2020.

⁵ Este apartado sigue la ideas del artículo de Martha Cecilia García y Ana María Restrepo “¡A quejarse al mono de la pila! Protestas en época de pandemia en Colombia”, En *Revista Cien días vistos por CINEP*. No. 100. Diciembre 2020.

Acuerdo Paz se exacerbaron en tiempos de cuarentena; y que el pliego presentado por el Comité de Paro, desde el año anterior, sigue sin trámite gubernamental, sumándose a él un Pliego de Peticiones, que contiene seis puntos básicos para mitigar la crisis económica.

Así mismo, indígenas, estudiantes, asalariados y campesinos le recordaron al Gobierno que hay muchos otros acuerdos incumplidos que fueron firmados para levantar otras protestas, y que cada vez se cree menos en la manida fórmula de establecer mesas de negociación o de invitar a conversaciones sectoriales o nacionales, porque son mecanismos que no contribuyen a satisfacer las demandas presentadas en las movilizaciones sociales.

Estos tres motivos cubren el 71% del total de las luchas de este periodo, cifra que junto a las propuestas que han acompañado estas acciones contenciosas, ratifican la tan temida y rechazada politización de la protesta social.

Un 20% de las luchas observadas ha sido motivadas por la expectativa de contar con un hábitat digno. En esas manifestaciones se ha denunciado la deficiente prestación de servicios sociales y públicos domiciliarios, unida al alza en sus tarifas (a pesar de las promesas de diferir el pago de facturas), la expulsión de moradores de viviendas en arriendo por falta de pago (y la concomitante invasión de espacios públicos, predios urbanos y de vivienda), las vías intransitables, y los problemas ambientales asociados a diversas formas de contaminación.

Los pliegos laborales siguieron siendo motor, aunque no exclusivo, de la movilización sindical. Esta pandemia no trajo consigo la enfermedad del olvido, por lo que también distintos actores sociales conmemoraron fechas significativas en los ámbitos internacional, nacional o puramente local.

Las administraciones municipales debieron enfrentar el mayor número de protestas (36%), aunque en sus manos no estuviera la posibilidad de solucionar buena parte de las demandas presentadas. El ejecutivo nacional ocupó el segundo lugar entre los adversarios más confrontados en las luchas sociales (con 24%), seguido de los entes privados (15%). Se incrementó el número de protestas contra las Fuerzas Militares, tanto la Policía (particularmente el Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional ESMAD), como el Ejército. Y esto ocurrió no sólo por la brutalidad policial desplegada para contenerlas protestas (violencia

Así mismo, indígenas, estudiantes, asalariados y campesinos le recordaron al Gobierno que hay muchos otros acuerdos incumplidos que fueron firmados para levantar otras protestas, y que cada vez se cree menos en la manida fórmula de establecer mesas de negociación o de invitar a conversaciones sectoriales o nacionales, porque son mecanismos que no contribuyen a satisfacer las demandas presentadas en las movilizaciones sociales

que este año se expuso desde las movilizaciones del 21 de enero, que recordaron que el paro iniciado el 21 de octubre continuaba), sino para denunciar la responsabilidad de miembros de la fuerza pública en homicidios de jóvenes, que aún no han sido explicados, y en abusos sexuales a niñas y adolescentes, ocurridos en zonas de despliegue militar.

El confinamiento obligatorio no impidió que las protestas se llevaran a cabo en la calle: las movilizaciones en forma de plantones, marchas (muchas de ellas de trabajadores informales, desempleados y migrantes portando trapos rojos y gritando “tenemos hambre”), al igual que caravanas vehiculares predominaron este año y, junto con los bloqueos de vías, coparon el 82% del total de las luchas sociales. Paros, invasiones de suelos, toma de entidades, disturbios, huelgas de hambre, cacerolazos y acciones de resistencia o desobediencia civil también hicieron parte del repertorio de las acciones sociales contenciosas del 2020.

Las luchas sociales de este año de pandemia nos han mostrado, de una parte, que la consigna juvenil “¡que la indignación se vuelva pandemia!” toma forma ante el manejo represivo, el desconocimiento de actores sociales y sus reivindicaciones, el clasismo, racismo y sexismo expresado en discursos y actitudes de autoridades civiles y militares de distintos rangos hacia los manifestantes, sean quienes sean, vengan de donde vengan, expresen lo que expresen. Y de otra, que el asombro y negación de la politización de la protesta



social, asunto de vieja data, que exhiben las élites políticas, ponen en evidencia su incapacidad de oír, ver y entender a quienes pretenden gobernar.

Estas protestas, que presentan nuevos motivos sobre viejas conflictividades, expresan la profundización de las desigualdades en el mundo rural, tanto en relación con la pandemia, como con la dinámica del Gobierno nacional actual. Y, sobre todo, como lo denunciaron las y los caminantes, que no hay garantías para la protección de los territorios, sus comunidades, organizaciones, líderes y lideresas. Ante la represión y los oídos sordos, las caminatas hasta la Casa de Nariño (residencia presidencial en Colombia), con nuevos repertorios y actores, seguirán nutriendo las protestas sociales en Colombia. Las movilizaciones recientes confirman que las luchas sociales no consisten en simples quejas, y que la violencia puede generar, de hecho, mucha más movilización. La experiencia acumulada en estos 42 años que han pasado desde el significativo paro cívico nacional de 1977, en Colombia, nos dice que es el Gobierno central quien tendrá que buscar alternativas serias y profundas, porque las organizaciones y comunidades tienen propuestas consistentes,

claras y realizables, y la disposición inquebrantable de construir paz desde los territorios.

Los gastos del Gobierno colombiano para atender la pandemia, un eslabón perdido⁶.

Pasados casi nueve meses desde el inicio de la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19, los colombianos siguen sin conocer, detalladamente, cuánto dinero se ha dispuesto, y cuánto dinero efectivamente se ha gastado para la atención de la emergencia. La ausencia de un plan de gasto detallado (programa por programa, peso por peso), que permita conocer con precisión la magnitud y la destinación específica de los recursos no sólo plantea dudas y tensiones en el seno de la opinión pública, sino que impide analizar con exactitud las medidas y decisiones que demandará la economía nacional para hacer frente a las consecuencias de una emergencia que ha lesionado de

⁶ Este apartado sigue las reflexiones del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, publicadas en el artículo: “Los gastos del gobierno en atención a la pandemia: aún no sabemos cuánto”, en la *Revista Cien días vistos por CINEP* No. 100. Diciembre de 2020.



forma dramática el tejido social, laboral y empresarial del país.

El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana ha venido haciendo seguimiento al desembolso de los recursos públicos destinados por parte del Gobierno nacional a la atención de la actual coyuntura, a partir de una revisión exhaustiva de los documentos y las informaciones entregados al público por parte del Ministerio de Hacienda. Según el reporte oficial del Ministerio de Hacienda, con corte al 23 de octubre 2020, el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) cuenta con 40,5 billones de pesos, de los cuales se han desembolsado 11,6 billones de pesos, equivalentes al 29%. Si bien es posible conocer los sectores e iniciativas generales hacia los que se han direccionado dichos recursos, no es posible conocer su ritmo total de ejecución.

Adicionalmente, los planes que se tienen para el monto no desembolsado todavía son opacos y poco detallados. Navegando las aguas del FOME **¿cómo hemos determinado estos montos? La primera revisión tuvo lugar en el mes de junio del año 2020.** Navegar las fuentes de información disponibles, para saber cómo se están gastando los recursos destinados a atender la pandemia, no ha sido una tarea fácil. Esta revisión inicial comprendió la lectura, el análisis y la

clasificación de 331 decretos, 40 resoluciones, 400 contratos, y cerca de una veintena de alocuciones presidenciales e intervenciones públicas de ministros y viceministros. ¿Cuántos ciudadanos de a pie, aún los más interesados, tienen el tiempo o el conocimiento técnico para abrirse paso por las intrincadas aguas del papeleo virtual, e interpretar las implicaciones de estos documentos? La más reciente revisión sobre cómo se han ejecutado los programas, con corte al 5 de octubre de 2020, encontró que los desembolsos en pesos se centraron en cuatro áreas principales: el programa Ingreso Solidario 4,1 billones; subsidios a la nómina desde los Programas de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y de Apoyo a la Prima (PAP) 3,3 billones; transferencias a programas sociales, que corresponden a transferencias extraordinarias a beneficiarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor 3,3 billones; y Salud 3,2 billones. Otros 796 mil millones se desembolsaron para sectores como Educación, Vivienda, Justicia, Defensa, Comercio y Agricultura.

Estas verificaciones tienen dos fuentes principales: el Portal de Transparencia Económica y la Sección de Presupuesto COVID-19 de la página electrónica del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, los datos se contrastan con el sitio Web sobre Ejecución Presupuestal de los recursos para la emergencia, el cual fue

habilitado en septiembre, casi seis meses después de la creación del FOME. Esta herramienta, aunque supone un avance en un frente que se ha destacado por su opacidad y la falta de detalle, se queda corta, pues reporta a qué entidades se les está entregando dinero, pero no detalla en qué programas se están gastando los recursos. Las revisiones del Observatorio sobre los ritmos de ejecución por parte del FOME, contrastan con declaraciones recientes del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, las cuales ratificaron que el Gobierno sigue sin informarles a los colombianos cuánto dinero se ha dispuesto para hacer frente a la emergencia. El 14 de octubre, por ejemplo, durante su intervención en la cumbre cafetera, el ministro habló de recursos “aprobados” por un valor de 33,8 billones de pesos. Dos días antes, en una entrevista concedida al periódico El Tiempo, habló de 33,7 billones. No se trata de una diferencia menor: 100 mil millones de pesos no son una cifra despreciable.

El confinamiento obligatorio no impidió que las protestas se llevaran a cabo en la calle: las movilizaciones en forma de plantones, marchas (muchas de ellas de trabajadores informales, desempleados y migrantes portando trapos rojos y gritando “tenemos hambre”), al igual que caravanas vehiculares predominaron este año y, junto con los bloqueos de vías, coparon el 82% del total de las luchas sociales. Paros, invasiones de suelos, toma de entidades, disturbios, huelgas de hambre, cacerolazos y acciones de resistencia o desobediencia civil también hicieron parte del repertorio de las acciones sociales contenciosas del 2020.

Esta disparidad en las cifras reportadas recuerda cómo, en mayo de 2020, en una transmisión televisiva, liderada por el presidente Iván Duque, el Gobierno nacional, en cabeza del viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que se estaban invirtiendo “cerca de 117 billones de pesos para atender la emergencia”. Es comprensible que los montos y las inversiones requeridas para hacer frente a las consecuencias de una pandemia cambien permanentemente. El problema es que los cambios en los montos, las destinaciones y los desembolsos no se les están contando a los colombianos de forma clara, proactiva, detallada y transparente. Con corte al 23 de octubre de 2020, el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) cuenta con 40,5 billones de pesos, de los cuales se han desembolsado 11,6 billones de pesos, equivalentes al 29%.

Ingreso solidario, ¿una puerta hacia la renta básica?

La mayor parte de los recursos que han salido hasta el momento del FOME, han sido destinados al programa Ingreso Solidario. Creado mediante el Decreto 518, este consiste en el pago mensual de 160 mil pesos (45 dólares aproximadamente) a los hogares que no están cubiertos por programas de asistencia, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Según su página web, el programa ha cubierto a 2,6 millones de hogares en 178 municipios del país. Inicialmente concebido hasta junio, se extendió hasta diciembre 2020. Finalmente, se determinó que los pagos irán hasta junio del presente año 2021. La puesta en marcha de este programa ha coincidido con el debate político en torno a la creación de una renta básica en Colombia. El debate, fue impulsado por un proyecto de ley respaldado por 68 congresistas de diversos partidos políticos. Aunque la iniciativa no llegó a ser discutida en el Congreso, líderes de distintas fuerzas siguen hablando del tema y, de hecho, lo han planteado como parte de los programas que comienzan a ambientar con miras a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2022.

¿A quiénes debería beneficiar una eventual renta básica? ¿Cuál es el monto deseable? En junio 2020, el Observatorio Fiscal analizó las distintas alternativas. La primera, en esencia impracticable, es una renta básica universal de un salario mínimo para todos los ciudadanos mayores de 18 años. La segunda es la renta básica garantizada o ingreso mínimo garantizado, una opción que, orientada a la eliminación de la pobreza



extrema, puede ser fácilmente implementada. El costo de acabar con la pobreza extrema en Colombia, con una renta básica garantizada focalizada, sería de 4,6 billones de pesos. Si se buscara ampliar el monto para que todos los colombianos tuvieran ingresos por encima de la línea de pobreza, el costo ascendería a 30 billones.

El análisis prospectivo sobre la posibilidad de crear esa renta básica en el país, como señalamos antes, no escapará al debate político de 2022. Por un lado, el último de los giros previstos en el marco de Ingreso Solidario llegará en junio del presente año 2021, es decir, menos de un año antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y por otro, la recuperación de la economía, y del tejido laboral y empresarial serán los ejes centrales de la campaña.

El empleo, la principal preocupación

Las consecuencias de la pandemia en el país son innumerables. Sin embargo, ninguna ha tenido un impacto tan grande y negativo como la destrucción del empleo. Según el DANE, entre febrero y mayo de 2020 se destruyeron más de 5 millones de puestos de trabajo. Al momento de escribir este artículo, se revelaba que el desempleo en Colombia durante septiembre se ubicó en 15,8%. Más que simples números, los datos sobre el desempleo en Colombia dan cuenta de un fenómeno que implica una seria disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos, y profundas afectaciones del tejido empresarial. Hasta el momento, el Gobierno no les ha explicado a los colombianos por

Las consecuencias de la pandemia en el país son innumerables. Sin embargo, ninguna ha tenido un impacto tan grande y negativo como la destrucción del empleo. Según el DANE, entre febrero y mayo de 2020 se destruyeron más de 5 millones de puestos de trabajo. Al momento de escribir este artículo, se revelaba que el desempleo en Colombia durante septiembre se ubicó en 15,8%. Más que simples números, los datos sobre el desempleo en Colombia dan cuenta de un fenómeno que implica una seria disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos, y profundas afectaciones del tejido empresarial

qué decidió no subsidiar las nóminas de las empresas, a pesar de que sabía desde abril cuánto costaría brindar ese apoyo y, lo que es más importante, tenía el dinero para hacerlo. Esa decisión, cualquiera hubiera sido su justificación, tuvo como consecuencia que millones de personas perdieran sus trabajos. ¿Cuánto tiempo tomará –pero, sobre todo, cuánto dinero costará– recuperar los empleos perdidos? La estimación todavía está pendiente. En cualquier caso, es posible afirmar que será mucho mayor al que se hubiera podido invertir para evitar su destrucción mediante la entrega de subsidios a la nómina de las empresas por parte del Gobierno, una alternativa que, además de solidaria con empresarios y trabajadores, era realista, realizable y responsable, en términos fiscales.

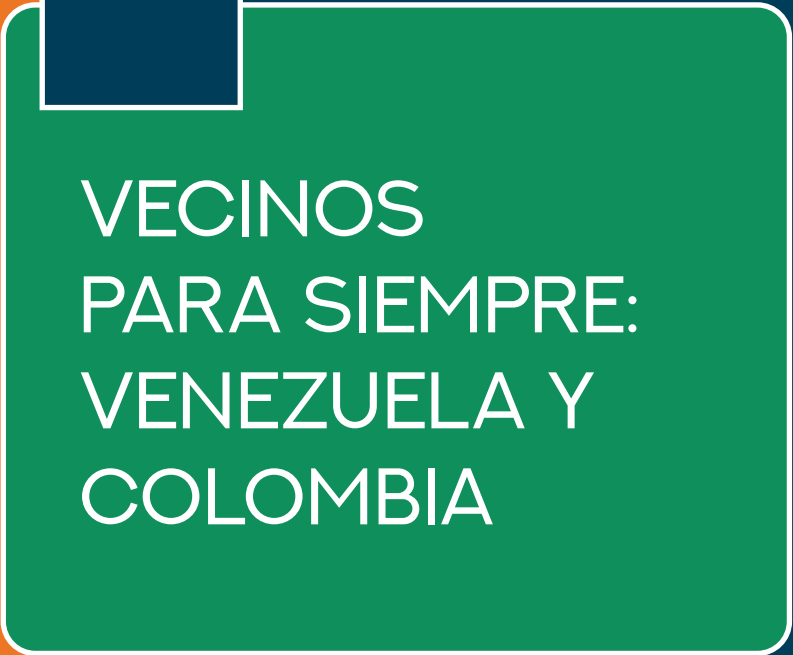
Así las cosas, el escenario por venir en Colombia se encamina hacia la peor contracción económica de su historia. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, “se estima que el PIB decrezca 5,5% en el año 2020 como consecuencia del choque originado por el COVID-19

y las medidas de aislamiento para la contención de la pandemia”.

De cara a un escenario pos pandemia, no puede dejarse de lado el estado de ánimo de la ciudadanía. A juzgar por los resultados de la Encuesta Pulso Social del DANE, los colombianos advierten un panorama especialmente sombrío en los meses por venir. La preocupación frente a las perspectivas de ahorro y el pesimismo frente a la generación de empleo destacan especialmente. La claridad sobre el manejo de los recursos, además, va más allá de un control netamente fiscal. Saber cómo, en qué y cuándo se gasta el dinero, les permite a los ciudadanos asignar, con mayor claridad, responsabilidades sobre las decisiones que toman sus líderes políticos y sobre las consecuencias de estas decisiones.

Finalmente, decir que no es entendible que, pasados casi once meses desde el inicio de la emergencia en marzo de 2020 hasta el momento de escribir este artículo, no se esté entregando información detallada sobre la gestión de los recursos y los planes de gasto a futuro. La falta de transparencia no equivale a corrupción o mala gestión de los dineros, pero sí afecta seriamente la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, en un momento de tensión en todos los niveles de la sociedad. No se sabe qué es entonces peor, si la pandemia misma, que ya es muy grave, o la gestión opaca y débil de las políticas del Estado colombiano en el manejo de las medidas socio-económicas.



A large, stylized number '4' is the central graphic. It is composed of a dark blue shape with a white outline. The top-left portion of the '4' is filled with a solid orange color, which also extends into a large orange rounded rectangle on the left side of the page. The rest of the '4' is dark blue with a white outline.A green rounded rectangle with a white border is positioned in the lower right area. It contains the text 'VECINOS PARA SIEMPRE: VENEZUELA Y COLOMBIA' in white, uppercase, sans-serif font.

VECINOS
PARA SIEMPRE:
VENEZUELA Y
COLOMBIA



Socorro Ramírez¹

A Colombia y Venezuela los une su frontera más larga, abigarrada y compleja. Ante todo, comparten poblaciones indígenas; además, cada país es el principal destino migratorio o de refugio para el otro: así como miles de colombianos buscaron empleo e ingresos en Venezuela en los años 70 y 80, y en los 90 se refugiaron de la violencia; a partir de 2015, aumentó el éxodo desde Venezuela, con la expulsión de colombianos que retornaron al país con familia binacional. Así las cosas, ha llegado la mitad de los más de cinco millones de venezolanos forzados a salir de su país, y mientras unos han seguido hacia otros destinos, otros tantos se han quedado en Colombia; miles más entran a Colombia a abastecerse, a buscar ingresos, servicios de salud o a recuperar remesas que les envían sus familiares migrantes; y, más recientemente, en medio de la pandemia, miles transitan hacia allá y hacia acá. Los dos países comparten, también, ecosistemas estratégicos, y cada lado ha generado formas de protección ambiental, cuya coordinación se ve afectada con las tensiones binacionales. La integración andina posibilitó un entrecruzamiento de las dos economías, mutuamente ventajoso, que generó empleos, ingresos, comercio, infraestructuras y oportuni-

Los dos países comparten, también, ecosistemas estratégicos, y cada lado ha generado formas de protección ambiental, cuya coordinación se ve afectada con las tensiones binacionales. La integración andina posibilitó un entrecruzamiento de las dos economías, mutuamente ventajoso, que generó empleos, ingresos, comercio, infraestructuras y oportunidades para ambos lados, hasta la salida de Venezuela de la Comunidad Andina.

¹ Historiadora y Politóloga, experta en temas relacionados con la frontera colombo-venezolana. Artículo publicado en la *Revista Cien Días* del Cinep, Edición n.º 100, Jun-Dic 2020.

dades para ambos lados, hasta la salida de Venezuela de la Comunidad Andina.

En ese contexto, veremos, primero, factores que agravan la situación de las zonas fronterizas colombiano-venezolanas, y luego, alternativas que ayudan a su transformación.

Agravantes de la situación

Las crisis de Venezuela

La destrucción económica, institucional, de infraestructura y servicios esenciales, la falta de abastecimiento básico, así como el crecimiento alarmante de desempleo, pobreza, violaciones de los derechos humanos, sociales y políticos, han generado una emergencia humanitaria compleja y prolongada, que, como lo muestra el informe de la misión de la ONU, ha forzado un éxodo masivo y repercute en el aumento de problemas a ambos lados de la frontera.

Agrava esas crisis el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro se aferre al poder a cualquier costo, como se ve, entre otros, en dos asuntos complicados. Uno, ante la destrucción de la industria petrolera, las sanciones económicas y la urgencia de conseguir divisas, se ha incentivado la explotación irregular de oro, coltán y de tierras raras en el arco minero energético del Orinoco, generando graves daños sociales, ambientales y de seguridad. Y dos, el aumento en el lado venezolano de la actividad del ELN y de disidencias de las FARC, se ha reflejado su intervención en distintos asuntos, en acuerdo con el régimen de Maduro.

Los intentos de negociación entre diversos sectores venezolanos han fracasado, y no se avizora una salida pactada.

En lugar de avanzar hacia una estrategia unitaria y efectiva, la oposición está cada vez más dividida y desligada de la ciudadanía, de los problemas cotidianos de la población que intenta sobrevivir, del éxodo al que se ve forzada para buscar alternativas en condiciones vulnerables.

En lugar de avanzar hacia una estrategia unitaria y efectiva, la oposición está cada vez más dividida y desligada de la ciudadanía, de los problemas cotidianos de la población que intenta sobrevivir, del éxodo al que se ve forzada para buscar alternativas en condiciones vulnerables

Ante esa incapacidad de articularse para construir una alternativa que logre una transición pacífica, que permita hacerle frente a las crisis acumuladas, cada vez más aliados internacionales de la oposición prefieren concentrarse en lo humanitario.

Destrucción del andamiaje institucional para manejar esa compleja vecindad

Las tensiones al final de los ocho años en que coincidieron los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe paralizaron toda la institucionalidad que ayudaba a procesar esa compleja vecindad: la Comisión Negociadora (CONEG), dedicada a asuntos como la delimitación marítima y la densificación de hitos en la frontera terrestre; la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON), que reunía a las Fuerzas Armadas y de Policía de los dos países; la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos (COPIAF), más conocida como Comisión de Vecindad, así como diversos mecanismos entre autoridades locales de ambos lados de la frontera.

En 2015, Maduro expulsó colombianos, ordenó “cierre total de la frontera” (peatonal, de vehículos y mercancías); un año después lo flexibilizó, pero en febrero de 2019 rompió relaciones diplomáticas y consulares, cerró y bloqueó los pasos legales, aunque después abrió algunos en horario restringido para personas y carga comercial. Con la pandemia, en marzo 2020, Duque ordenó también el “cierre de fronteras”.



Foto: OIM.

En 2015, Maduro expulsó colombianos, ordenó “cierre total de la frontera” (peatonal, de vehículos y mercancías); un año después lo flexibilizó, pero en febrero de 2019 rompió relaciones diplomáticas y consulares, cerró y bloqueó los pasos legales, aunque después abrió algunos en horario restringido para personas y carga comercial. Con la pandemia, en marzo 2020, Duque ordenó también el “cierre de fronteras”

La línea limítrofe de 2.219 kilómetros no es una cremallera que permita impedir los flujos transfronterizos; “cerrar fronteras” solo bloquea los 7 pasos formales existentes, obligando a las personas y mercancías a atravesar por trochas informales en las que grupos armados irregulares se disputan el control, imponiendo sus regulaciones con extorsión, trata de personas, explotación sexual y trabajo forzado.

Así, el éxodo poblacional queda en condiciones aún más vulnerables; el activo comercio fronterizo, en lugar de generar empleos e ingresos legales, ve crecer el contrabando, la corrupción, las economías ilegales (como la venta de gasolina, ahora de Colombia a Venezuela), la criminalidad y la violencia.

A la diplomacia del micrófono de reacción y confrontación permanente, se agrega el control militarizado de territorios limítrofes, la geopolitización y securitización de asuntos nacionales y binacionales, una carrera armamentista y la amenaza del uso de la fuerza. Todo eso agrava los problemas de las zonas fronterizas.

Política del gobierno de Iván Duque

Pese a que los intereses de Colombia son radicalmente distintos de los que tiene Estados Unidos sobre Venezuela, más aún bajo el impredecible Trump, dispuesto a lo que sea en pro de su reelección, Duque ha secundado su estrategia. Con su partido, el Centro Democrático, ha respaldado sanciones económicas y se ha aliado con el sector opositor que, para buscar una salida, privilegia la acción externa por sobre la negociación.

Duque acompañó la estrategia de la oposición venezolana que arrancó en enero de 2019, cuando, ante la elección irregular de Maduro, la Asamblea Nacional nombró a su presidente Juan Guaidó como encargado de la presidencia de Venezuela. En febrero, con el concierto para presionar la entrada desde Colombia de donaciones humanitarias a Venezuela, Duque anunció que en cuestión de horas caería Maduro. Luego, sectores opositores venezolanos impulsaron un fallido intento de rebelión militar y, con la participación de venezolanos exiliados, antiguos miembros de fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos y la empresa de seguridad privada contratada para proteger el concierto de febrero, instalaron un campo de entrenamiento en Maicao, con el fin de realizar la Operación Gedeón y sacar del poder a Maduro. Al llegar a Venezuela, el 3 de mayo de 2020, la aventura fracasó.

Todo ese complicado proceso ha tenido efectos negativos en ambos países, los cuales se han aumentado por otras políticas como el lanzamiento de las llamadas Zonas Futuro para “combatir cultivos ilícitos”, y la llegada, el 20 de julio de 2020, de 53 militares estadounidenses a 5 unidades militares cerca a Venezuela, según el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, para “asesoramiento, cooperación y entrenamiento en la lucha contra el narcotráfico”. Esa lucha la reducen a forzar la disminución de cultivos para uso ilícito con fumigaciones aéreas, pese a sus efectos ambientales, en la salud, los cultivos legales y las poblaciones locales.

Pese a que los intereses de Colombia son radicalmente distintos de los que tiene Estados Unidos sobre Venezuela, más aún bajo el impredecible Trump, dispuesto a lo que sea en pro de su reelección, Duque ha secundado su estrategia. Con su partido, el Centro Democrático, ha respaldado sanciones económicas y se ha aliado con el sector opositor que, para buscar una salida, privilegia la acción externa por sobre la negociación



Foto: Víctor de Currea-Lugo.

Interferencias en la construcción de paz

La paz territorial, punto esencial del Acuerdo de Paz, debe generar impactos positivos, en especial en las zonas fronterizas donde se acumuló el conflicto armado, y donde se ubicó la mitad de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación de exguerrilleros de las FARC.

Luego de la realización de la consulta veredal-municipal-subregional, para la construcción de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el esbozo de Planes de Acción para la Transformación Regional, se paralizó el proceso de priorización de proyectos de ordenamiento social de propiedad y uso del suelo, infraestructura y adecuación de tierras, salud, educación, vivienda, agua potable y saneamiento, así como de emprendimientos con participación étnica y mecanismos de reconciliación. También se paralizó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Como el gobierno de Duque no ha podido reiniciar la fumigación con glifosato, dado que no ha cumpli-

Frente al agravamiento de la situación fronteriza por las tensiones entre los dos países, las gobernaciones del Táchira y Norte de Santander pusieron en marcha mesas de trabajo que han ayudado a procesar y hacer avanzar temas cruciales. En lo ambiental, atendieron una emergencia que afectó las dos naciones. Ante el cierre de pasos fronterizos formales, han tratado de concretar el paso de migrantes y retornados, así como un corredor humanitario para que las personas que tienen que ir a abastecerse o a buscar servicios en Cúcuta, puedan hacerlo a través de los puentes. En medio de la pandemia han intentado coordinar el control sanitario conjunto

do las condiciones que exigió la Corte Constitucional (aplicación de planes preventivos, mitigación ambiental, consulta previa a comunidades étnicas, sustitución voluntaria y sólo si fracasa recurrir a otra forma, agosto de 2019), intensificó la erradicación forzada con la participación de la Fuerza Pública en el 82% de municipios del PNIS, lo que generó tensiones con comunidades locales y aumentó 35% la resiembra de coca. Eso revierte logros del PNIS y del Plan de Atención a Recolectores de hoja de coca, con los que había comenzado la reconversión laboral, vinculándolos a la gestión comunitaria para mejoramiento de escuelas, reforestación y mantenimiento de vías terciarias o caminos de herradura. Frenó, también, lo que propiciaba que cultivadores y “raspachines” encontraran ingresos para su subsistencia, los municipios ahorraran recursos y las comunidades fortalecieran su tejido social, logros decisivos para las fronteras, pues 70% de los cultivos de coca están en zonas colindantes con Venezuela y Ecuador.

Venezuela fue país garante de la mesa de conversación del Gobierno colombiano y el ELN, pero esa negociación de paz se ha hecho imposible por los atentados de esa guerrilla, y por las tensiones del Gobierno Duque con Cuba y con el régimen de Maduro. El ELN lo ha aprovechado para consolidar su retaguardia estratégica en zonas fronterizas, tales como Arauca, donde concentra buena parte de tropas, mandos y controles territoriales, y cada vez más en el Catatumbo, aunque allí mantiene disputas violentas. Esto para convertirse en actor binacional usando a Venezuela como su santuario estratégico. El ELN resulta útil para el régimen de Maduro en una triple perspectiva: evitar o resistir una intervención militar externa que asume como posible, estimular a las fuerzas armadas venezolanas muy atadas a la hipótesis de conflicto por el diferendo limítrofe, y fragilizar a Colombia atándola al conflicto interno que centra su Ejército en la contrainsurgencia, y para intentar recuperar zonas mineras controladas por bandas criminales y sacar recursos del oro, diamantes, coltán, para lo cual en 2016 creó el Arco Minero del Orinoco ante los problemas de PVDSA y la caída de precios del petróleo.



Venezolanos en Colombia durante cuarentena. Foto: Damian Guisao.

Transformación de conflictos en las fronteras

Además de programas como la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, que por años ha desarrollado el CINEP/ PPP, han surgido dos esperanzadores procesos.

Gobernaciones y cámaras

Frente al agravamiento de la situación fronteriza por las tensiones entre los dos países, las gobernaciones del Táchira y Norte de Santander pusieron en marcha mesas de trabajo que han ayudado a procesar y hacer avanzar temas cruciales. En lo ambiental, atendieron una emergencia que afectó las dos naciones. Ante el cierre de pasos fronterizos formales, han tratado de concretar el paso de migrantes y retornados, así como un corredor humanitario para que las personas que tienen que ir a abastecerse o a buscar servicios en Cúcuta, puedan hacerlo a través de los puentes. En medio de la pandemia han intentado coordinar el control sanitario conjunto. Las secretarías de educación entregaron

cartillas pedagógicas para población escolar de ambos países, y han tratado de garantizar el paso de quienes estudian en diversas ciudades colombianas. En cuanto a seguridad, han planteado a los gobiernos centrales la urgencia de acciones concretas que permitan enfrentar esa problemática.

Esas mesas de las gobernaciones se amplían con alcaldes, gremios económicos y cámaras de comercio, buscando cómo evitar la circulación fronteriza por los pasos irregulares y sentar las bases de recuperación económica, confianza ciudadana, entendimiento y cooperación crucial para enfrentar la crisis humanitaria, socioeconómica y de seguridad. El diálogo ha ido construyendo una Hoja de Ruta, con al menos cinco ejes.

- Salud y manejo de la pandemia para acordar protocolos sanitarios y de bioseguridad

que permitan el restablecimiento del tránsito de personas.

- Acciones humanitarias transfronterizas, una mesa dirigida por autoridades territoriales, con participación de obispos, del Servicio Jesuita a Refugiados y de organizaciones de la sociedad civil de cada país.
- Apertura de los pasos fronterizos legales para transporte terrestre de mercancías: retiro de contenedores en los puentes, controles sanitarios y aduaneros que permitan la reactivación comercial y económica con condiciones institucionales y de infraestructura.
- Constitución de una mesa de apoyo regional transfronterizo, dirigida por autoridades territoriales, con gremios del transporte de carga, logística, cámaras de comercio y gremios binacionales.
- Construcción de una política de inclusión e integración de colombianos retornados, familias binacionales y migrantes venezolanos, que genere coordinación entre autoridades locales, regionales y nacionales con cooperación internacional y organizaciones de sociedad civil.

Diplomacia ciudadana

En septiembre de 2019, más de un centenar de académicos, miembros de organizaciones sociales, humanitarias, gremiales, redes y plataformas de derechos humanos de Colombia y Venezuela, firmamos una declaración expresando la necesidad de generar una convergencia binacional entre distintos sectores. En noviembre, diversos sectores de ambos países, reunidos en Bogotá, analizaron problemáticas de cada lado y de la frontera compartida, acordaron llamarse Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV) y estimular una diplomacia social en favor de una solución pacífica de las crisis en Venezuela y de la construcción de paz en Colombia, a fin de atender los problemas que se agravan en la frontera y la reconstrucción de la relación consular y binacional, en defensa de los derechos de migrantes y retornados.

En enero 2020, en Cúcuta, PCCV revisó con alcaldes y gobernadores electos del lado colombiano de

la frontera, la situación de cada ámbito fronterizo y la manera de incorporar en los planes de desarrollo local, la atención al éxodo forzado desde Venezuela. En febrero, en Bogotá, realizó reuniones con la Comisión Segunda de Senado y Cámara que se ocupan de la política exterior y con la presidencia del Congreso, a fin de examinar la situación fronteriza y la actuación del gobierno de Colombia frente a Venezuela, al igual que el éxodo desde ese país; participó del concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil binacional “Colombia-Venezuela, más que un conflicto”, y apoyó la consecución de recursos que hace FUNDIMUSICOL para la sobrevivencia y compra de instrumentos musicales para los venezolanos participantes.

Desde marzo, en medio de la cuarentena, PCCV ha realizado una veintena de diálogos virtuales con diversos sectores de los dos países: líderes indígenas, organizaciones sociales, redes de comunicación, universidades, cámaras de comercio, para analizar las diversas situaciones agravadas por la pandemia y las dificultades para hacerle frente común a la riesgosa situación. En algunos diálogos han intervenido migrantes venezolanos y colombianos retornados, así como miembros de la Iglesia y organizaciones dedicadas al seguimiento de la problemática migratoria, sobre todo en Bogotá, Cúcuta y el Caribe, donde se concentra la mayor parte del éxodo. Varios diálogos han estado asociados a eventos de otras entidades, tales como universidades, Cinep, CRIES, Pares, Fescol, El Espectador, Semana, el Instituto de Paz de Estados Unidos, el Instituto para las Transiciones Integrales, y entidades de Naciones Unidas o de la Unión Europea. También ha participado en reuniones o gestiones con la Cámara Colombo-Venezolana los gremios económicos y las gobernaciones para buscar la apertura de los pasos fronterizos legales. Las reuniones virtuales de PCCV se han regularizado cada mes con tres partes que desarrollan sus ejes de acción: el análisis de las problemáticas nacionales, fronterizas o binacionales; la coordinación de actividades, y el diálogo con un sector u organización que realiza iniciativas afines.

Es de esperar que las diplomacias fronteriza y ciudadana logren fortalecer nexos positivos que ayuden a procesar y transformar problemáticas cruciales entre los dos países.

A large, stylized number '5' is the central graphic. The left vertical bar of the '5' is a solid orange shape. The rest of the '5' is a dark blue shape with a white outline. The top horizontal bar of the '5' is also dark blue with a white outline. A small orange square is positioned at the junction where the top horizontal bar meets the vertical bar.

HACERSE EL
SUECO CON EL
CORONAVIRUS:
LA IGNORANCIA
AL TIMÓN EN
NICARAGUA

Jorge A. Huete-Pérez¹

El informe titulado *Al pueblo de Nicaragua y al mundo: Informe sobre el COVID-19 y una estrategia singular - libro blanco*, evidencia lo que científicos independientes han señalado: frente a las amenazas de la pandemia, las autoridades han oscilado entre la ignorancia grosera y el triunfalismo jactancioso. Como si fuera poco, el informe insinúa que, para enfrentar la pandemia, Nicaragua sigue el modelo sueco. Ante las críticas de las asociaciones médicas, el informe podría considerarse la respuesta oficial.

La política central del régimen Ortega-Murillo frente a la pandemia, aparentemente, ha sido dejar y promover que el coronavirus se propague a sus anchas, sin importar el número de muertes.

El modelo sueco

Es absurdo comparar a Nicaragua con Suecia; los indicadores esenciales de salud de ambos países se encuentran diametralmente distantes. Basta decir que, según datos del Banco Mundial, Nicaragua cuenta con nueve médicos por cada diez mil habitantes, mientras Suecia cuenta con cuarenta (World Bank, 2020). El gasto per cápita en salud de Nicaragua es de USD 192 (incluyendo el aporte del paciente), mientras que en Suecia es de USD 5.905. En Suecia, la esperanza de vida al nacer es de 83 años, mientras que en Nicaragua era de 74 años antes de la debacle de 2018.

Si bien la estrategia de Suecia frente a la pandemia se ha diferenciado de la del resto de los países europeos (p. ej., no se impuso un bloqueo total de las actividades económicas), el Gobierno sueco prohibió las aglomeraciones de más de cincuenta personas. A pesar de que las escuelas primarias no cerraron, las de educación secundaria superior (a las que asisten adolescentes mayores de 16 años) y las universidades pasaron a la modalidad de educación en línea. Además, se incentivó que las personas enfermas se quedaran en casa, que la población evitara los bares y restaurantes, y que se trabajara desde casa, para practicar el distanciamiento físico y social. Ninguna de estas medidas del modelo sueco se impulsó en Nicaragua.

Lo anterior no significa que el modelo sueco para enfrentar el COVID-19 haya sido bien valorado. No se sabe de algún país europeo que trate de imitarlo. Al 25 de mayo 2020, Suecia reportaba un total de 45.133 casos confirmados y 4.694 fallecimientos por coronavirus; para un país de alrededor de 10 millones de personas, estas cifras no parecieran tan malas, comparadas con las de Italia o España, seriamente afectados por la enfermedad. Pero esos mismos datos resultan excesivos si se comparan con los de sus vecinos nórdicos, Dinamarca, Finlandia y Noruega, los cuales han establecido medidas más restrictivas para contener el contagio.

Tampoco pareciera conveniente seguir el modelo sueco en Nicaragua, porque no ha resultado eficaz ni seguro. Aunque la situación aún no es catastrófica, cada vez hay más cuestionamientos hacia la estrategia relajada de Suecia.

¹ Vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA) – Managua, Doctor en Bioquímica/Biología Molecular. Una versión anterior de este artículo se publicó en: *COVID-19, el caso de Nicaragua. Aportes para enfrentar la pandemia (Septiembre 2020)*. Nicaragua: Academia de Ciencias de Nicaragua.

Un grupo numeroso de científicos suecos han criticado severamente que la estrategia resultó en demasiadas muertes que pudieron evitarse (Schneider 2020).

Se reprocha que Suecia no haya atendido adecuadamente a la población en más riesgo, como la gente de edad muy avanzada, las minorías étnicas y los inmigrantes; esto expone las limitaciones éticas del enfoque sueco, al abandonar a su suerte a los más vulnerables. Así lo ha reconocido autocríticamente el epidemiólogo Anders Tegnell, líder de la estrategia en la lucha contra la propagación del coronavirus (Henley, 2020).

Pero un elemento distintivo que vuelve inaplicable el modelo sueco en Nicaragua es que en el país nórdico las decisiones en materia de salud pública no están expuestas a ninguna interferencia política. La agencia de salud pública sueca cuenta con suficiente autoridad para definir las estrategias sanitarias con independencia de la élite política. Las decisiones se toman en consulta con expertos independientes y competentes, lo que refuerza su consistencia y credibilidad. Todo eso es improbable en la Nicaragua de hoy, donde ni siquiera hay independencia de los poderes del Estado y porque, desde 2007, se vive un proceso sistemático de degradación de los derechos humanos.

El modelo Ortega-Murillo: Desprecio por la ciencia

El desconocimiento de la realidad y el máximo desprecio del conocimiento científico son dos de las principales características del modelo propuesto, del Gobierno nicaragüense, para el coronavirus. Desde el principio, las autoridades desestimaron las amenazas del coronavirus —la estrategia del avestruz— y creyeron que, al desentenderse del problema, no pasaría nada. Negaron las evidencias científicas. En pleno apogeo de la pandemia, un diputado, médico de profesión, alegó públicamente que “mata más la gripe que el coronavirus” (Navas, 2020), cuando todos los estudios han demostrado que el coronavirus es al menos veinte veces más letal que la gripe (Achenbach, 2020).

Los científicos recomiendan el distanciamiento social como una de las medidas cruciales de contención del virus. Se sabe que, en buena medida, su rápida propagación ocurre por medio de microgotas de saliva de personas asintomáticas o con síntomas muy leves. Pero en Nicaragua, desde los ministerios y otras instituciones del Estado se convocan actividades que conllevan la aglomeración de personas. Como si fuera poco, se prohibió a los médicos y trabajadores de la salud usar

Es absurdo comparar a Nicaragua con Suecia; los indicadores esenciales de salud de ambos países se encuentran diametralmente distantes. Basta decir que, según datos del Banco Mundial, Nicaragua cuenta con nueve médicos por cada diez mil habitantes, mientras Suecia cuenta con cuarenta (World Bank, 2020). El gasto per cápita en salud de Nicaragua es de USD 192 (incluyendo el aporte del paciente), mientras que en Suecia es de USD 5.905. En Suecia, la esperanza de vida al nacer es de 83 años, mientras que en Nicaragua era de 74 años antes de la debacle de 2018.

mascarillas y demás equipos de protección para, según ellos, no alarmar a la población innecesariamente (EFE & Confidencial, 2020).

Desde concepciones primitivas, las autoridades recurrieron a un pensamiento mágico, según el cual bastaría con invocar las fuerzas sobrenaturales del bien para combatir la pandemia, una fuerza sobrenatural del mal. Por ello, el presidente Ortega ha concluido, después de una reflexión profunda que le llevó 34 días de encierro, que el coronavirus es una señal de Dios. Posteriormente, compararía el coronavirus con la tos convulsa, conocida en Nicaragua como tos chifladora, de los tiempos de su niñez en los años 40, para arremeter contra la campaña #QuedateEnCasa, que busca bajar la curva de infección mediante el distanciamiento físico (Canal 4 Nicaragua, 2020).

El cuello de botella: La falta de pruebas de diagnóstico

En su actitud de negación de la realidad, el Gobierno ha recurrido a desechar o fabricar información, según le parezca conveniente. Esto ha quedado en evidencia gracias al trabajo del Observatorio Ciudadano Independiente, que ha documentado miles de casos sospechosos y centenares de fallecidos, a partir de reportes de las asociaciones médicas y de los familiares de víctimas.



La renuencia del Gobierno a realizar suficientes pruebas diagnósticas desde las primeras semanas del brote debería considerarse como un error garrafal en el abordaje de la pandemia de coronavirus en Nicaragua. En epidemiología, el tiempo es crucial; cada minuto perdido puede significar la pérdida de cientos de vidas. En este sentido, las autoridades han dejado al país solo y a oscuras o, como hemos dicho antes (Huete-Pérez 2020), en plena ceguera diagnóstica frente a una realidad asustadora. Impidieron que se conociera el tamaño real del contagio y que se establecieran las medidas correspondientes a tiempo.

El libro blanco del Gobierno nicaragüense (Secretaría Privada para Políticas Nacionales, 2020) no explica por qué desestimaron las recomendaciones centrales de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la necesidad de hacer pruebas de diagnóstico, “pruebas, pruebas y más pruebas” (BBC 2020), para detectar los brotes de coronavirus en el territorio nacional. La detección oportuna de los casos es fundamental para frenar el avance de las epidemias y la manera más directa de detectar la presencia de un patógeno en una población es por medio de exámenes de laboratorio de los casos sospechosos.

Las pruebas de diagnóstico continuarán siendo una deuda y el principal cuello de botella mientras dure la pandemia, porque si no se conoce dónde están los brotes del virus en los territorios no se puede detener el contagio. Los datos recientes revelados por los medios de comunicación (Confidencial, 17 de mayo de 2020), sobre las pruebas realizadas por el laboratorio central del Minsa, demuestran que se ha efectuado solo una muestra ínfima de pruebas de coronavirus que, aunque insuficientes, aportan más claridad sobre la omisión de datos importantes y demuestran el secretismo y la falta de transparencia que caracterizan la gestión de las autoridades nacionales.

La alteración de resultados y datos ha conllevado a que no cuadren el número de casos positivos y el número de fallecimientos: en los primeros días de mayo 2020, se reportaba una inverosímil tasa de letalidad del 27 %, de las más altas del mundo. Así mismo, debido a sesgos en el muestreo y al insuficiente rastreo de casos, hasta mediados de mayo pasado los datos del laboratorio central arrojaban una preocupante tasa de contagio del 27 %. Para colmo, el 19 de mayo pasado, cuando bajo presión pública el Gobierno finalmente presentó más datos, estos reflejaban que en tan solo

una semana **Nicaragua pasó oficialmente de 25 a 279 casos de COVID-19**, un incremento de más de 1.000 %, otro récord mundial en la pandemia.

Mientras no se descentralice la realización de pruebas, para incluir más centros de diagnóstico, incluyendo hospitales y laboratorios privados, Nicaragua seguirá a la cola del continente en cuanto a pruebas de coronavirus.

Una comparación petulante

Las autoridades suecas han explicado que sus acciones cuentan con respaldo científico de la Agencia Sueca de Salud Pública integrada por 15 miembros (Paterlini 2020). De modo que no les agrada a los suecos verse mencionados en un mismo párrafo con otros gobiernos que carecen de legitimidad y están acusados internacionalmente de graves delitos y violaciones de derechos humanos.

La comparación con Suecia ya es objeto de burlas y memes. Se ha dicho que podría haber un malentendido: no es que las autoridades nicaragüenses estén siguiendo el modelo sueco, sino que están *haciéndose* los suecos con el coronavirus, como se dice en Nicaragua cuando se eluden las responsabilidades. La nueva Suecia al norte de la Suiza centroamericana.

Comparar la incompetencia de Nicaragua con el modelo de Suecia resulta petulante e incompatible. Si las autoridades buscaban imitar un modelo realista para enfrentar la pandemia debieron revisar la experiencia de Vietnam, que ha sobresalido por su excelente gestión. A la primera noticia de la epidemia, los vietnamitas establecieron rápidamente un conjunto de acciones simples y rigurosas, con lo cual lograron limitar el contagio a menos de tres casos por millón de habitantes y el número de fallecimientos a cero, una verdadera hazaña para un país pobre. También han tenido éxito las estrategias de Grecia y Costa Rica, con importantes avances en terapia que usa el plasma de las personas recuperadas de COVID-19 como tratamiento efectivo para pacientes graves.

El fracaso del modelo familiar y comunitario

El modelo familiar y comunitario fracasó frente al coronavirus. La mejor estrategia para Nicaragua era frenar, a toda costa, la propagación del virus, como lo supondría un modelo que se dice enfocado en la prevención, no en la atención hospitalaria, como se ha

El modelo familiar y comunitario fracasó frente al coronavirus. La mejor estrategia para Nicaragua era frenar, a toda costa, la propagación del virus, como lo supondría un modelo que se dice enfocado en la prevención, no en la atención hospitalaria, como se ha tenido que hacer ahora con centenares de enfermos al mismo tiempo. El modelo, que debía enfocarse en la prevención, no pudo implementarse debidamente, porque de entrada se enrocaron en su lema: "Ningún tipo de cuarentena" (Ministerio de Salud, 2020). Con ese tipo de cerrazón, eliminaron de un plumazo las acciones más acostumbradas en cualquier epidemia.

tenido que hacer ahora con centenares de enfermos al mismo tiempo. El modelo, que debía enfocarse en la prevención, no pudo implementarse debidamente, porque de entrada se enrocaron en su lema: "Ningún tipo de cuarentena" (Ministerio de Salud, 2020). Con ese tipo de cerrazón, eliminaron de un plumazo las acciones más acostumbradas en cualquier epidemia.

La decisión de dejar que el virus entrara y se propagara sin control implica, también, que las autoridades debieron proyectar un contagio entre el 60 % y el 90 % de la población, necesario para la inmunidad de rebaño. Además, estimar que un 20 % de las personas contagiadas enfermarían de gravedad y que habría un 2,3 % (entre 17.000 y 27.000 personas) de muertes es un sacrificio innecesario y a todas luces inmoral. Quienes impulsaron el modelo Ortega-Murillo seguramente conocían estas proyecciones presentadas, reiteradamente, por diversos epidemiólogos y debieron preguntarse sobre la moralidad y la legitimidad de sus decisiones, que han conllevado a centenares de muertos.

La pandemia ha revelado *que, en Nicaragua, la ciencia y el conocimiento son relegados para imponer los intereses políticos de los gobernantes.* Hace mal la vice-

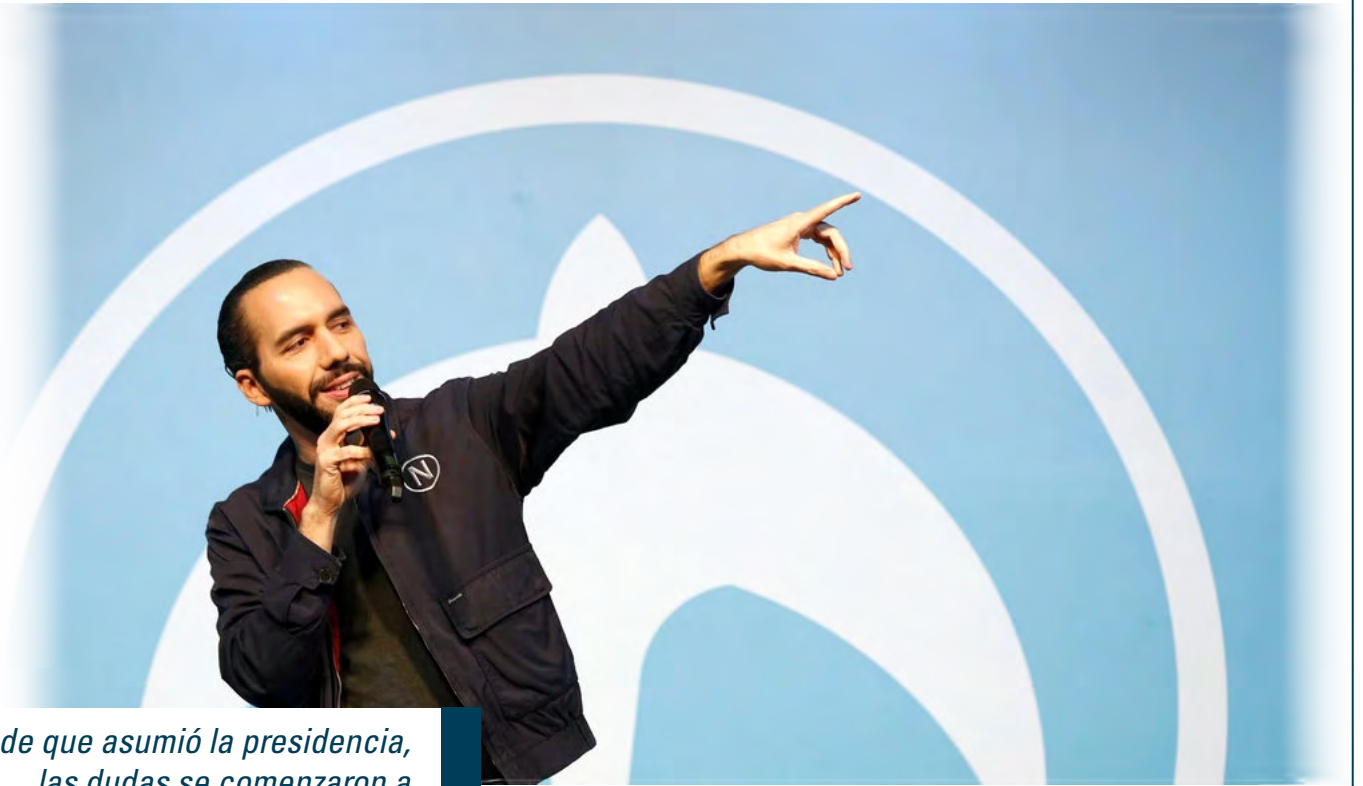
presidenta Murillo cuando insulta a los expertos independientes, con epítetos como “unos cuantos miserables” y “cerebros deformes” (Álvarez, 2020). Aunque en su libro en blanco el Gobierno cante victoria sobre el coronavirus y aduzca tener controlada la pandemia, Nicaragua está rumbo a presentar uno de los mayores índices de muerte por coronavirus en Centroamérica, con más de 2.500 casos positivos y más de 400 fallecimientos al despegue de la fase comunitaria. Sin conocimiento y sin ciencia, sin una verdadera estrategia de mitigación del COVID-19, Nicaragua no podrá superar las amenazas de la pandemia.

Referencias

- Achenbach, J. (28 de abril de 2020). “Antibody tests support what’s been obvious: COVID-19 is much more lethal than the flu”. *The Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/health/antibody-tests-support-whats-been-obvious-covid-19-is-much-more-lethal-than-flu/2020/04/28/2fc215d8-87f7-11ea-ac8a-fe9b8088e101_story.html
- Álvarez, L. (7 de mayo de 2020). “Rosario Murillo en nueva jornada de insultos a sus adversarios: «Cerebros deformes», enfermos”. *La Prensa*. <https://www.laprensa.com.ni/2020/05/07/politica/2671312-rosario-murillo-en-nueva-jornada-de-insultos-a-sus-adversarios-cerebros-deformes-enfermos>
- BBC (16 de marzo de 2020) WHO head: “Our key message is: test, test, test”. *BBC World News*. <https://www.bbc.com/news/av/world-51916707/who-head-our-key-message-is-test-test-test>
- Canal 4 Nicaragua. (15 de abril de 2020). *Nicaragua: Mensaje del presidente comandante Daniel Ortega* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=vYYLXYQ-sb4>
- Confidencial (7 de mayo de 2020). “Minsa oculta datos de pruebas covid-19 en laboratorio” CNDR. *Confidencial*. <https://confidencial.com.ni/minsa-oculta-datos-de-pruebas-covid-19-en-laboratorio-cndr/>
- EFE, & Confidencial. (6 de abril de 2020). Juan S. Chamorro: “Negligencia de Ortega ante COVID-19 pasará factura”. *Confidencial*. <https://confidencial.com.ni/negligencia-de-ortega-ante-covid-19-pasara-factura/>
- Henley, J. (3 de junio de 2020). “We should have done more, admits architect of Sweden’s COVID-19 strategy”. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/architect-of-sweden-coronavirus-strategy-admits-too-many-died-anders-tegnell>
- Huete-Pérez, J.A. (30 de marzo de 2020). “La peligrosa fase de transmisión comunitaria del COVID-19 sin planes de mitigación”. *Confidencial*. <https://confidencial.com.ni/la-peligrosa-fase-de-transmision-comunitaria-del-covid-19-sin-planes-de-mitigacion/>
- Ministerio de Salud. (28 de febrero de 2020). “Medidas frente al coronavirus” [Comunicado de prensa]. <http://waltermairena.net/canal6/wp-content/uploads/2020/02/MINSA-MEDIDAS-FRENTE-AL-CORONAVIRUS-28-NOV-2020.pdf>
- Navas, L. (30 de abril de 2020). “Gustavo Porras asegura que el COVID-19 mata menos personas que la gripe. Estudios científicos demuestran lo contrario”. *La Prensa*. <https://www.laprensa.com.ni/2020/04/30/politica/2668733-gustavo-porras-minimiza-mortalidad-del-covid-19-asegurando-que-mata-menos-personas-que-la-gripe>
- Paterlini, M. “Closing borders is ridiculous: the epidemiologist behind Sweden’s controversial coronavirus strategy”. *Nature*. 2020;580(7805):574. doi:10.1038/d41586-020-01098-x
- Schneider, L. (7 de abril de 2020). “Swedish scientists call for evidence-based policy on COVID-19”. *For Better Science*. <https://forbetterscience.com/2020/04/07/swedish-scientists-call-for-evidence-based-policy-on-covid-19/>
- Secretaría Privada para Políticas Nacionales. (2020). *Al pueblo de Nicaragua y al mundo: Informe sobre el COVID-19 y una estrategia singular - libro blanco -*. <https://canal6.com.ni/wp-content/uploads/2020/05/AL-PUEBLO-DE-NICARAGUA-Y-AL-MUNDO-INFORME-SOBRE-EL-COVID-19...-4.pdf>
- The World Bank Group. (2020). En <https://tradingeconomics.com/nicaragua/physicians-per-1-000-people-wb-data.html>



DE PRESIDENTE
MÁS *COOL*
A PRIMER
DICTADOR
MILLENNIAL



Desde que asumió la presidencia, las dudas se comenzaron a despejar. A través del twitter Bukele se ha hecho amar y temer. Despidió a empleados públicos, dando órdenes a través de la red social, por ser familiares de funcionarios del gobierno anterior. A algunos se les despició con una humillación innecesaria, pero la población los aprobó y los aplaudió. Era parte del combate a la corrupción. Había llegado un líder con autoridad, con poder y fuerza al que le obedecían todos los funcionarios sin cuestionar nada. Era lo que muchos estaban esperando en el país. Muy pronto lanzó con gran parafernalia mediática el "Plan Control Territorial" para acabar con la delincuencia y la violencia de las maras y pandillas, principal preocupación de la población desde hacía muchos años

Omar Serrano

Resumen

La pandemia de Covid-19 fue la gran oportunidad para que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su gobierno, se redimieran ante el país y ante el mundo de lo que muchos consideraron un intento de golpe de Estado perpetrado el 9 de febrero de 2020. Pero el presidente desperdició la oportunidad, o más bien, desde su punto de vista, la aprovechó para profundizar su estilo autoritario y la corrupción. A pesar de ello, el mandatario goza del respaldo de la mayoría de la población.

Cuando este texto se haga público, muy probablemente ya se conozcan los resultados de las últimas elecciones en El Salvador programadas para el 28 de febrero. Al momento de escribir estas líneas, la mayoría de encuestas señalan que el país entrará a una nueva etapa de su historia que, sin embargo, no será tan nueva. Las proyecciones auguran que el partido del presidente Nayib Bukele obtendrá la mayoría de escaños en la Asamblea Legislativa lo que, en términos prácticos, equivale a darle el control de toda la institucionalidad nacional. El país habrá regresado así a la década de los años setenta del siglo pasado, en la que el poder Ejecutivo disponía sobre todo y sobre todos. Si los pronósticos se han cumplido, la pregunta obligada es ¿cómo es posible que haya sucedido eso después de describir el estilo antidemocrático del presidente que se evidenció de manera diáfana durante la pandemia?

El prólogo de la pandemia: El presidente más “cool” del mundo

Nayib Bukele fue noticia al asumir la presidencia de El Salvador. Infobae lo calificó como el primer presidente millennial de la historia y él dijo de sí mismo que era el presidente más *cool* del mundo¹. El éxito de Bukele descansaba, al inicio de su mandato, en tres pilares: El respaldo de la mayoría de la población salvadoreña (dentro y fuera del país), el apoyo incondicional del ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) y la imagen internacional que proyectó. El presidente y su potente equipo multinacional de asesores, especialistas en marketing político, supo aprovechar con maestría el descontento popular con los partidos tradicionales. Metió en el mismo saco de “los mismos de siempre” a Arena (extrema derecha) y al FMLN (extrema izquierda), los dos partidos que gobernaron después de la guerra (1980-1992). A ambos los señaló de corruptos, señalamiento que ya estaba en el imaginario colectivo. Él, en cambio, era distinto. Su eslogan “cuando nadie roba el dinero alcanza” tocó las fibras del electorado que lo vio como el “salvador” de un país en crisis. Ganó con amplio margen las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019 en una situación sin precedentes en el país. Triunfó con eslóganes atractivos y pegajosos, pero sin un plan de gobierno, sin propuestas claras y realistas, sin contacto presencial con los votantes, sin alianzas con sectores sociales y sin partido propio. En ese entonces su partido –Nuevas Ideas– estaba en proceso de inscripción y Bukele corrió por un partido de extrema derecha, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANU), escindido de Arena y con el cual había meses antes que jamás competiría. Su popularidad fue indiscutible, y la mayoría de la población vio –y sigue viendo– una promesa de cambio real para el país.

Comienzan las dudas sobre su vocación democrática

Una vez ganó las elecciones y dio sus primeros pasos, comenzaron a cernirse dudas sobre su vocación democrática. No nombró a ningún equipo de su parte para realizar una transición ordenada, nunca atendió a ningún medio nacional de comunicación que pedían entrevistarle ni dio conferencia de prensa en el país. Sus reuniones se limitaron a atender a representantes de organismos multilaterales y a funcionarios del gobierno estadounidense. El único discurso que dio en este tiempo tuvo lugar el 13 de marzo de 2019 en la sede de la Heritage Foundation en Washington, entidad que asesoró al gobierno de Ronald Reagan y que apoyó las políticas anti-inmigrantes de Donald Trump. Ahí, Bukele se declaró fiel seguidor de los

¹ “Oficialmente soy el Presidente más *cool* del mundo”, tuiteó Nayib Bukele el 7 de junio de 2019, seis días después de asumir la presidencia de El Salvador. En el mensaje compartió un video del youtuber Jacobo Wong, que lo había bautizado de esa manera, maravillado con el mandatario de 37 años y su uso indiscriminado de Twitter para todos los actos de gobierno.

La llegada del virus a tierra salvadoreña fue la inmejorable ocasión para que el presidente recupera su malograda imagen. Además, representó la excusa perfecta para gestionar recursos económicos, tema por el que se obsesionó el presidente desde el inicio de su gestión. El covid-19 le daba la posibilidad de gestionar miles de millones de dólares, muchísimo más que los 109 por los que perdió la cordura el 9 de febrero. Y el presidente comenzó bien. El de El Salvador fue el primer gobierno de la región en tomar medidas migratorias. Prohibió la llegada de vuelos de China, Italia, Irán y progresivamente del resto de países hasta cerrar todas las fronteras

principios del neoliberalismo. En la misma declaración de la fundación, se plasma su objetivo: “promover la difusión de los principios de libertad individual, gobierno limitado, libertad de empresa, la defensa nacional y los valores estadounidenses tradicionales”. Así llegó el 1 de junio de 2019, fecha en que el nuevo presidente asumía el poder, con dos sombras sobre su gestión: La del estilo autoritario y la de la profundización del neoliberalismo.

Las dudas se despejaron pronto

Desde que asumió la presidencia, las dudas se comenzaron a despejar. A través del twitter Bukele se ha hecho amar y temer. Despidió a empleados públicos, dando órdenes a través de la red social, por ser familiares de funcionarios del gobierno anterior. A algunos se les despidió con una humillación innecesaria, pero la población los aprobó y los aplaudió. Era parte del combate a la corrupción. Había llegado un líder con autoridad, con poder y fuerza al que le obedecían todos los funcionarios sin cuestionar nada. Era lo que muchos estaban esperando en el país. Muy pronto lanzó con gran parafernalia mediática el “Plan Control Territorial” para acabar con la delincuencia y la violencia de las maras y pandillas, principal preocupación de la población desde hacía muchos años. El plan que comprende varias fases nunca se dio a conocer en su totalidad. La primera fase consistía en un despliegue del ejército en las zonas de control de las pandillas para neutralizarlas. Las calles de los barrios pobres de la capital se llenaron de militares. Durante los primeros gobiernos de Arena (1989-1999) el ejército fue utilizado en tareas de seguridad pública de manera discreta, casi

invisible. Durante los siguientes gobiernos de Arena y los del FMLN (1999-2019), al ejército se le dio visibilidad pública en esas tareas. Bukele lo hizo un protagonista de la vida diaria, como lo fue antes y durante la guerra civil. La población se entusiasmó. La mano dura contra las pandillas había llegado.

Es en este contexto en el que el presidente urge a la Asamblea Legislativa a aprobarle préstamos para seguir implementando las fases siguientes de su Plan de Control Territorial. El congreso nacional, mayoritariamente en manos de Arena y el FMLN, se volvieron exigentes con el presidente y pedían cuentas de lo gastado antes de aprobar más préstamos. El presidente comenzó con su narrativa: Quien no esté de acuerdo con darle más dinero para combatir a las maras y pandillas está en contra de la vida y está con los asesinos de la gente. Y entonces Bukele cometió el mayor error político en lo que va de su gestión. La inquietud por el estilo autoritario de algunos sectores de la sociedad civil se disparó el 9 de febrero de 2020. Bukele, acompañado de militares, se tomó las instalaciones de la Asamblea Legislativa para presionar a los y las diputadas para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para su plan de seguridad. Previamente Bukele incitó a la población a sublevarse en contra de los legisladores. Los exhortó públicamente a ejercer el derecho a la insurrección contemplado en el artículo 87 de la Constitución. Algunos miles de personas, muchos de ellos empleados públicos, se hicieron presentes en las afueras del recinto legislativo. Bukele los arengó, y profirió insultos contra los diputados. Entró en el recinto legislativo donde los militares tomaron el control de la seguridad interna, se sentó en el curul del presidente del primer órgano del Estado, tocó el gong e inauguró la sesión. Después como lo hacen los musulmanes, oró a su dios; se mantuvo unos segundos en esa posición y a continuación se levantó sin decir una palabra y salió del salón de sesiones de los diputados. De nuevo frente a la población enardecida, dijo que Dios le había dicho que tuviera paciencia y que les diera una semana más para aprobar sus demandas.

Las sorprendentes imágenes de estos sucesos dieron la vuelta al mundo mientras la imagen que había construido Bukele en casi una década y en la que invirtió tantos recursos, se resquebrajó. Uno de los tres pilares en los que descansaba su éxito comenzó a desmoronarse y se terminó de caer con las acciones que hizo durante la pandemia de Covid-19.

La pandemia: Una oportunidad caída del cielo

La llegada del virus a tierra salvadoreña fue la inmejorable ocasión para que el presidente recupera su malograda imagen. Además, representó la excusa perfecta

para gestionar recursos económicos, tema por el que se obsesionó el presidente desde el inicio de su gestión. El covid-19 le daba la posibilidad de gestionar miles de millones de dólares, muchísimo más que los 109 por los que perdió la cordura el 9 de febrero. Y el presidente comenzó bien. El de El Salvador fue el primer gobierno de la región en tomar medidas migratorias. Prohibió la llegada de vuelos de China, Italia, Irán y progresivamente del resto de países hasta cerrar todas las fronteras. Anunció el reparto de \$300.00 para 2.7 millones de familias. El anuncio más rimbombante fue la construcción, en tres meses, del hospital provisional más grande de América Latina para el Covid-19. Al redactar estas líneas todavía el nosocomio -que al final no fue provisional- y cuyo presupuesto asciende a 100 millones de dólares, no ha sido terminado completamente después de casi un año. Aunque es muy seguro que se inaugure antes del 28 de febrero por fines electorales.

Lo único que vale es la palabra del Presidente

Sin embargo, Bukele y su equipo no resistieron la tentación de hacer de la situación de sufrimiento y de angustia de la población, la ocasión para profundizar su autoritarismo y para convertir a la pandemia en una verdadera piñata. Bukele se alineó con lo que han hecho históricamente los que sacan ventaja personal del sufrimiento ajeno: Confirmar que las crisis, como la emergencia que vivimos, son los momentos más eficaces para socavar la democracia y fortalecer los autoritarismos.

Coyunturalmente, el tema recurrente del presidente dejó de ser las maras y pandillas y pasó a ser la pandemia. Quien apoyaba todas sus propuestas, estaba a favor de la vida. Quien se mostraba crítico o se resistía a acceder a sus demandas, se ponía del lado de la muerte. La pandemia fue malograda por el mandatario y, pretendiéndolo o no, cumplió el manual de todo buen aprendiz de dictador.

“La Sala de lo Constitucional nos acaba de ordenar que, dentro de cinco días, asesinemos a decenas de miles de salvadoreños” 9 junio 2020

Twitt del presidente después de que la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional algunos decretos del Ejecutivo y llamara a buscar un acuerdo con la Asamblea Legislativa.

Ninguna ley -ni siquiera la Constitución de la República- ni ningún poder del Estado, puede contrariar la voluntad del presidente. Tomó decisiones que fueron cuestionadas por el poder legislativo y por la Corte Suprema de Justicia. De los primeros se burló y a los segundos les llamó “leguleyos” y a sus sentencias las

Nunca escuchó la voz de los expertos -los médicos especialistas-, no escuchó las propuestas de la academia para implementar cercos sanitarios, ni prestó atención a las sugerencias de economistas para afrontar la crisis económica. Solo el presidente sabe lo que hay que hacer. Públicamente en conferencias de prensa, daba indicaciones al Ministro de Salud -primo suyo- sobre el tipo de medicamentos a suministrar a los pacientes. Bukele comenzó a manejar al país como una de sus empresas y a su gabinete como sus empleados, nunca como interlocutores. Sus decisiones son inapelables e incuestionables



calificó de chistes. Su persona concentra todo el poder del gobierno y toma personalmente las decisiones, generalmente transmitidas en un texto de twitter. El presidente polarizó al país de una manera semejante a la sufrida durante la guerra civil. En la bolsa de “los mismos de siempre”, comenzó a meter, como por decreto presidencial, a todos aquellos que comenzaron a criticar su gestión. Medios de comunicación, academia, organizaciones sociales y hasta el Colegio Médico, pasaron a engrosar la lista de los que el gobierno identificó como contrarios. Nunca escuchó la voz de los expertos -los médicos especialistas-, no escuchó las propuestas de la academia para implementar cercos sanitarios, ni prestó atención a las sugerencias de economistas para afrontar la crisis económica. Solo el presidente sabe lo que hay que hacer. Públicamente en conferencias de prensa, daba indicaciones al Ministro de Salud -primo suyo- sobre el tipo de medicamentos a suministrar a los pacientes. Bukele comenzó a manejar al país como una de sus empresas y a su gabinete como sus empleados, nunca como interlocutores. Sus decisiones son inapelables e incuestionables.

Los centros de contención

En el marco de la respuesta al coronavirus, Bukele implementó una de las respuestas más estrictas de la región. La apertura de los llamados “centros de contención” -un eufemismo para referirse a verdaderos centros de detención- para todos aquellos que fueran sorprendidos incumpliendo el encierro domiciliario decretado por el gobierno. Estos centros, según las organizaciones defensoras de derechos humanos, se

volvieron el epicentro de las violaciones a los derechos humanos durante la pandemia y en uno de los focos de contagios durante la misma. Miles de personas encerradas en ellos denunciaron condiciones de hacinamiento e insalubres, sin agua y sin los implementos mínimos para protegerse del contagio del virus. Además, muchos pasaron más semanas de las que les correspondía e incluso denunciaron haberse contagiado del virus durante su encierro

La militarización de la pandemia

Los actores principales de la contención de la pandemia no fueron los que laboran en el campo de la salud, por lo menos no para el gobierno. Los protagonistas fueron los hombres y mujeres de verde olivo. Los militares fueron, junto a la PNC, los encargados de hacer cumplir las órdenes del presidente en referencia a la pandemia. El Salvador vivió más una emergencia de seguridad que una emergencia sanitaria. Militares fueron los encargados de detener a quienes consideraban que violaban la cuarentena, eran los responsables de los centros de contención, implementaban los cercos sanitarios, repartieron alimentos para las familias. El presidente Bukele los ha llamado los “verdaderos héroes” ganándose la incondicionalidad de la cúpula del estamento militar y del policial.

A la larga, no hay autócrata que tarde o temprano no necesite de la fuerza de las armas para hacer valer su voluntad. Bukele lo sabe. El 9 de febrero, en la toma de la Asamblea Legislativa, dijo, antes de entrar al recinto: “ahora queda claro quien tiene el control”, refiriéndose al respaldo de los militares.

El discurso de odio y la mentira como política pública

El presidente hizo del discurso de odio y de la mentira una política de gobierno. Como buen aspirante a dictador, buscó un enemigo al cual culpar de todos los

males del país. Como en Estados Unidos Trump culpó a los migrantes de todos los males y en Alemania y el resto de Europa Hitler lo hizo lo propio con los judíos, Bukele definió como culpables de todo a “los mismos de siempre”, categoría que, como ya se dijo, fue ampliándose progresivamente.

"ARENA y FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos".

Twitt del Presidente Bukele el 1 de febrero de 2020 tras hacerse públicos implicados en las negociaciones entre políticos y pandillas para tener más votos y poder ganar elecciones. Medios de comunicación han revelado que durante la administración de Bukele en la alcaldía de San Salvador, también sus funcionarios se reunieron con miembros de pandillas.

La narrativa de Bukele es que toda la institucionalidad salvadoreña responde a los mismos de siempre. En consecuencia, hay que barrer con todo para crear una nueva historia del país, nueva historia que comienza con él. Trump también dijo que con él Estados Unidos comenzaba una nueva historia (*Make America great again*). Por ello, las actuaciones de los otros poderes del Estado salen sobrando, al igual que las leyes del país. Lo que Bukele dice es lo que se hace.

De presidente cool a primer dictador millennial

En la medida que la tendencia al verticalismo quedaba demostrada, que se constataba una progresiva erosión de los procesos institucionales, que la crítica muy fuerte, casi represión, de las opiniones que cuestionaban sus medidas iba creciendo, la percepción internacional fue asentándose. Bukele pasó de ser el primer gobernante millennial a transitar hacia “el primer dictador millennial de la historia”, según lo consignó la revista *The Economist* en su edición del 7 de mayo del 2020. “En sus 11 meses como presidente, ha hecho más para destruir la democracia de El Salvador que para reformarla,” escribió la revista en esa fecha. José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch, alertó sobre que “El Salvador va camino a convertirse en otra dictadura latinoamericana a menos que haya una respuesta internacional”. Esta postura le ha costado a Vivanco el que el presidente Bukele lo haya puesto en la lista, cada vez más extensa, de los que están con “los mismos de siempre”.

La pandemia ha sido un botín

La política se ha ejercido en nuestros países al estilo patrimonial. Se administra el Estado y sus recursos como si fueran patrimonio de los gobernantes. Y el gobierno de Bukele va en esta línea. El coronavirus representó la oportunidad de captar muchísimo dinero, afán que ha quedado claro desde que el presidente inició su gestión.

Bukele es, sin duda, la persona más influyente en el país y, como tal, define la narrativa que todo el mundo repite en El Salvador. Normalmente lo ha hecho con eslóganes cortos pero que a la población les resultan atractivos y fáciles de memorizar. Por ejemplo, “los mismos de siempre”, “cuando nadie roba el dinero alcanza”. En su enfrentamiento con los otros poderes del Estado durante la pandemia, Bukele posicionó los siguientes dos eslóganes: “Me han quitado todas las facultades” y “no me han dado ningún centavo partido por la mitad”. El primero era una respuesta a las sentencias de la Sala de lo Constitucional ante los no pocos actos reñidos con la ley del presidente. El segundo se refiere a qué la Asamblea Legislativa no le aprobó ni un préstamo para hacerle frente a la pandemia. Lo más trágico no es que quien ocupa la primera investidura en el país mienta, sino que la mayoría de la población le crea. Y ese es precisamente el mayor éxito de Bukele.

En una comparecencia del entonces presidente del Banco Central de Reserva, Nicolás Martínez, ante la Asamblea Legislativa, el funcionario reveló que el gobierno dispuso entre enero y agosto de 2020 de un total de \$ 6,486.8 millones, producto de deuda adquirida e ingresos tributarios². El Salvador dispuso, en promedio, de \$15 millones diarios para enfrentar la pandemia. Esta revelación desmintió de un tajo una de las narrativas del presidente y le costó ser depuesto del cargo a Martínez. Otro funcionario del gobierno reveló en una entrevista, que Martínez corrió esa suerte porque desobedeció la orden del presidente de no atender las convocatorias de la Asamblea Legislativa, aunque la ley obligue a atenderlas. Otros funcionarios de alto nivel como los titulares del Ministerio de Hacienda renunciaron a sus cargos bajo el supuesto de que no aceptaron los manejos subterráneos de las finanzas del Estado que hace el gobierno.

El gobierno de El Salvador entregó ayudas de \$300.00 a las familias en situación de vulnerabilidad. Pero nunca ha rendido cuentas de a cuántas familias se les entregó el dinero ni sus nombres. La Corte de Cuentas de la República encontró, según un informe de auditoría, que no encontraba 100 mil familias que

² Ver nota en <https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/deuda-publica-gobierno-dispuso-de-mas-6-mil-millones-pandemia/755145/2020/>

supuestamente fueron reportadas como beneficiarias del dinero. Por otro lado, la Fiscalía General de la República encontró que el 66.8% de las compras de insumos médicos para la pandemia está bajo sospecha de negociaciones ilícitas. Además, investigaciones periódicas han revelado una serie de compras con irregularidades durante la pandemia.

- Empresa de un funcionario vendió protectores faciales al gobierno (Salud con Lupa, Junio 2020)
- El gobierno compró 400 mil protectores faciales a precios sobrevalorados (Salud con Lupa, junio 2020)
- 66.8 % de las compras de insumos médicos está bajo investigación por negociaciones ilícitas (El Faro, noviembre 2020)
- Empresa de candidato de Nuevas Ideas ganó un millón de dólares en contratos de la emergencia (El Faro, octubre de 2020)
- Los contratos del primo del ministro Alabí con MITUR ascienden a \$19,500 (El Faro, julio de 2020)
- Gobierno compró \$344 mil en mascarillas a empresa del diputado Escalante y su familia (El Faro, junio de 2020)
- Bandedal dio crédito a hermana de Comisionada Presidencial pese a detectar conflicto de interés
- Ministro Alabí compró \$225 mil en botas para médicos a empresa de su familia (Gato Encerrado, julio de 2020)

Se prohíbe la verdad

Dicen que el mejor antídoto para la corrupción es la transparencia y la falta de ella es indicio de que no se están manejando los asuntos con honestidad. El gobierno de Bukele se ha caracterizado, además de por su autoritarismo, por la opacidad en el manejo de los recursos. La Ley de Acceso a la Información Pública permite a las entidades públicas, en determinadas ocasiones, declarar información reservada. La regla en el gobierno salvadoreño es ocultar todo para no rendir cuentas de nada. Hay reserva total sobre el Plan Nacional de Salud que, según se les escapó a algunos funcionarios, no existe a pesar de que el presidente ha hecho alarde de sus frutos. Es información reservada todo lo que tiene que ver con las compras de alimentos que se repartieron a las familias, con la compra de insumos médicos, con los gastos realizados en la cons-

trucción y el equipamiento en el hospital para atender casos de Covid. Además, también lo son los convenios entre instituciones del Estado que tengan que ver con la pandemia, el costo de las vacunas, las estadísticas sobre los casos de Covid, el Plan Control Territorial, etc., etc. Para colmo, la instancia encargada de evaluar si las reservas de información son justificables legalmente, el Instituto de Acceso de la Información Pública, ha sido desnaturalizada con el nombramiento de personas que parecen tener por única misión garantizar el secretismo y el ocultamiento. Total, como dice el adagio popular ¿Para qué contratar abogados si se puede comprar al juez?

Y entonces ¿por qué el respaldo popular?

El presidente Bukele y el grupo que está detrás suyo, tiene la virtud de que, a la vez que critica a los gobernantes anteriores, hace lo mismo o peores cosas que ellos y es percibido por la población como distinto. Bukele atacó el nepotismo haciendo más nepotismo. Todos sus hermanos ocupan cargos en el gobierno, sean oficiales o no. Un primo es Ministro de Salud; otro es el presidente de su partido político; otro presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Su tío es Secretario de Comercio e Inversión, su cuñada es Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores. En altos puestos también están compadres, amigos de infancia y empleados de sus empresas que a su vez han contratado a sus allegados. Con razón se habla de que en El Salvador tenemos un gobierno familiar. Otros se atreven a decir que en el gobierno hay un califato.

Por otro lado, Bukele llegó a la presidencia con la bandera de la anti-corrupción y es el gobierno menos transparente de los últimos años. El que nada debe, nada oculta, y este gobierno oculta todo y las sospechas de corrupción son fundadas. Las dimensiones de lo defraudado al Estado todavía son incalculables. Finalmente el actual gobierno criticó a los gobiernos anteriores, especialmente al FMLN de donde fue expulsado, por no resolver los graves problemas que aquejan a la población. Sin embargo, no tiene propuestas para enfrentar la crisis y su única apuesta es la profundización del modelo neoliberal, cuyo legado ha sido el aumento de la desigualdad y la agudización de la pobreza.

Pese a todo lo anterior, Bukele cuenta con el respaldo de la mayoría de la población. Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país. Brasil, México, Francia, el Reino Unido con el brexit, han experimentado situaciones parecidas. De acuerdo con los postulados de la posverdad, lo que Bukele ha tocado son creencias y



Por otro lado, Bukele llegó a la presidencia con la bandera de la anti-corrupción y es el gobierno menos transparente de los últimos años. El que nada debe, nada oculta, y este gobierno oculta todo y las sospechas de corrupción son fundadas. Las dimensiones de lo defraudado al Estado todavía son incalculables. Finalmente el actual gobierno criticó a los gobiernos anteriores, especialmente al FMLN de donde fue expulsado, por no resolver los graves problemas que aquejan a la población. Sin embargo, no tiene propuestas para enfrentar la crisis y su única apuesta es la profundización del modelo neoliberal, cuyo legado ha sido el aumento de la desigualdad y la agudización de la pobreza.

emociones de la población. Logró canalizar el descontento de la gente con los políticos que fueron deshonestos e incapaces de resolver sus problemas. Y sembró en ellos la creencia de que él es diferente. En esta lectura, la evidencia deja de ser importante. Cuando la persona decide creer en algo o en alguien, las razones no valen.

Bukele y su equipo son especialistas en marketing. Probablemente la mediática sea la única estrategia clara en su gobierno. Es un experto en redes sociales y ahora cuenta con tres medios estatales que en realidad son instrumentos al servicio de su partido. Como por arte de magia, vende ideas y consignas que el pueblo cree y repite, aunque la evidencia científica lo desmienta. Pero hoy, eso no vale. Así enfrentamos o habremos enfrentado las elecciones legislativas y municipales. En juego no está solo una nueva Asamblea Legislativa, lo que los y las salvadoreñas hemos puesto en el tapete es la decisión sobre el régimen político que gobernará al país: o se sigue profundizando el difícil camino de la Democracia, o volvemos a los años setenta con un gobierno autoritario. Pero lo que persiste en El Salvador es una especie de encantamiento que impide ver lo evidente o, en palabras de Saramago, convierte a los seguidores del considerado mesías en “ciegos que, viendo, no ven”.

A large, stylized number '7' is the central graphic element. It is composed of a dark blue shape with a white outline. The top bar of the '7' is a solid dark blue rectangle. The vertical stem is a dark blue shape that tapers slightly towards the bottom. The number is positioned on the left side of the page, overlapping a large orange rounded rectangle that occupies the left third of the frame. The background of the entire page is a solid dark teal color.

MIRAR LA
PANDEMIA EN
PERSPECTIVA
ESPIRITUAL



La oración siempre parte de y termina con el reconocimiento de la presencia de Dios, y nos dispone hacia la receptividad. Para mí la “receptividad” es la esencia de la relación orante que llevamos con Dios, porque Dios nunca cesa de ser providente (primereando, como dice el neologismo del papa Francisco), queriendo a sus criaturas y su creación a pesar de sus pecados o la maldad que el pecado ha causado. Dios tiene una manera de transformarlo todo en gracia. Por eso, la mirada que echamos en y con la oración en sus formas más profundas puede ser amorosa y no miedosa. Es por algo que Jesús nos amonesta repetidas veces en el evangelio: “¡No temas!”

Allan Figueroa Deck, S.J.¹

*...aun la noche es luminosa como el día;
la tiniebla es como la luz del día
Salmo 139:12*

El escritor espiritual William Barry, fallecido el año pasado, definía la oración, concisamente, como “una mirada amorosa hacia la realidad”. Claro que no se refería tanto a la oración de petición que es, tal vez, la forma que más se practica, sino a la oración mental en la que ejercemos la imaginación y practicamos el silencio, para de veras escuchar a Dios, en vez de hablarle a él. Siempre me llamaba la atención esta definición de Barry porque se compagina bien con la meta ignaciana de “encontrar a Dios en todas las cosas”.

Si lo ponderamos suficientemente, vemos que la definición de Barry no apoya la dicotomía que hace mucho daño entre lo espiritual y lo mundano o propone otras formas dualistas o binarias de hablar y pensar.

¹ Facultad de Estudios Teológicos, Loyola Marymount University, Los Ángeles, California.



La pura verdad es que por debajo de la desgracia del COVID-19 ha habido muchos beneficios. Uno de ellos es una consciencia generalizada de nuestra dependencia y fragilidad humana. La cultura moderna con su impaciencia y deseo de conseguir todo con un "clic" del botón ha tenido que dilatar su carrera loca y redescubrir masivamente la virtud de la esperanza

Para mí, la definición propuesta por Barry supera el dualismo que "desencarna" a Dios, sacándolo de las realidades de las cuales el Todopoderoso es creador y con las cuales se ha identificado de una vez para siempre enviando a su hijo, metiéndose en el fango, para ser como nosotros seres humanos en todo menos en el pecado.

Se me ocurre pensar esto especialmente en el contexto de la pandemia que hemos vivido por más de un año y que seguiremos viviendo, por lo menos, un año más, hasta que la humanidad consiga la anhelada inmunidad. Propongo aquí echar una mirada "amorosa" hacia esta realidad, es decir, compartir con los lectores algunas reflexiones producidas en mí al llevar a la oración, lo que se ha experimentado durante esta plaga horrorosa.

La oración siempre parte de y termina con el reconocimiento de la presencia de Dios, y nos dispone hacia la receptividad. Para mí la "receptividad" es la esencia de la relación orante que llevamos con Dios, porque Dios nunca cesa de ser providente (*primereando*, como dice el neologismo del papa Francisco), queriendo a

sus criaturas y su creación a pesar de sus pecados o la maldad que el pecado ha causado. Dios tiene una manera de transformarlo todo en gracia. Por eso, la mirada que echamos en y con la oración en sus formas más profundas puede ser amorosa y no miedosa. Es por algo que Jesús nos amonesta repetidas veces en el evangelio: "¡No temas!"

La oración nos permite acercarnos a y recibir e interiorizar la realidad, los hechos, siempre en la presencia de un Dios providente, con confianza para descubrir lo que significan para uno en relación con los designios misteriosos de Dios que la fe nos dice son últimamente benévolos. Claro que, para beneficiarse del tiempo para este tipo de oración, es preciso iniciarlo sobre todo con "valentía". Se trata de no huir de las emociones negativas e incómodas, como el miedo, el horror, el enojo, los celos, o el revanchismo, sino acercarse a ellas para descubrir qué mensaje o significado tendrán por debajo para uno. ¡Se trata de encontrar a Dios en lo agradable y en lo desagradable, en lo que atrae y en lo que repugna, es decir, en todo!

Hay una escuela de espiritualidad que se llama bio-espiritualidad, fundada por los presbíteros Peter Campbell y Edward McMahon, que aún propone que nos hagamos amigos de los sentimientos negativos y dolorosos, que los abracemos y nos sentemos calmadamente a su lado para escucharlos.

La pandemia del COVID-19 es real: una plaga nos ha invadido dejando más de dos millones de muertes y todavía contando en todo el mundo. Hemos perdido padres, madres, esposos, esposas, hermanos y abuelos, compañeros de trabajo y también jóvenes y niños. Las economías han sido devastadas, la educación de nuestros hijos e hijas interrumpida, demorada o simplemente eliminada. Millones más han sufrido los efectos físicos y psicológicos de esta pandemia despiadada. Las rutinas diarias han sido destruidas y las grietas e imperfecciones de los matrimonios, las amistades, las comunidades e instituciones han sido expuestas a la luz del día revelando, muchas veces, las grietas y problemas desapercibidos en tiempos normales. Debido a prácticas fervorosamente recomendadas de distanciamiento social y cuarentena, la humanidad se ha enterrado en una fosa de aislamiento y soledad. En conjunto, todo esto acaba siendo como un ensayo universal para el infierno. Además, cada día oímos de nuevas amenazas y otros acontecimientos penosos. ¿Hasta dónde prevalecerá el mal?

Sin embargo, una mirada amorosa hacia esta fealdad espantosa no se detiene en lo feo, lo malo, lo espantoso. Busca más bien la luz en la tiniebla.

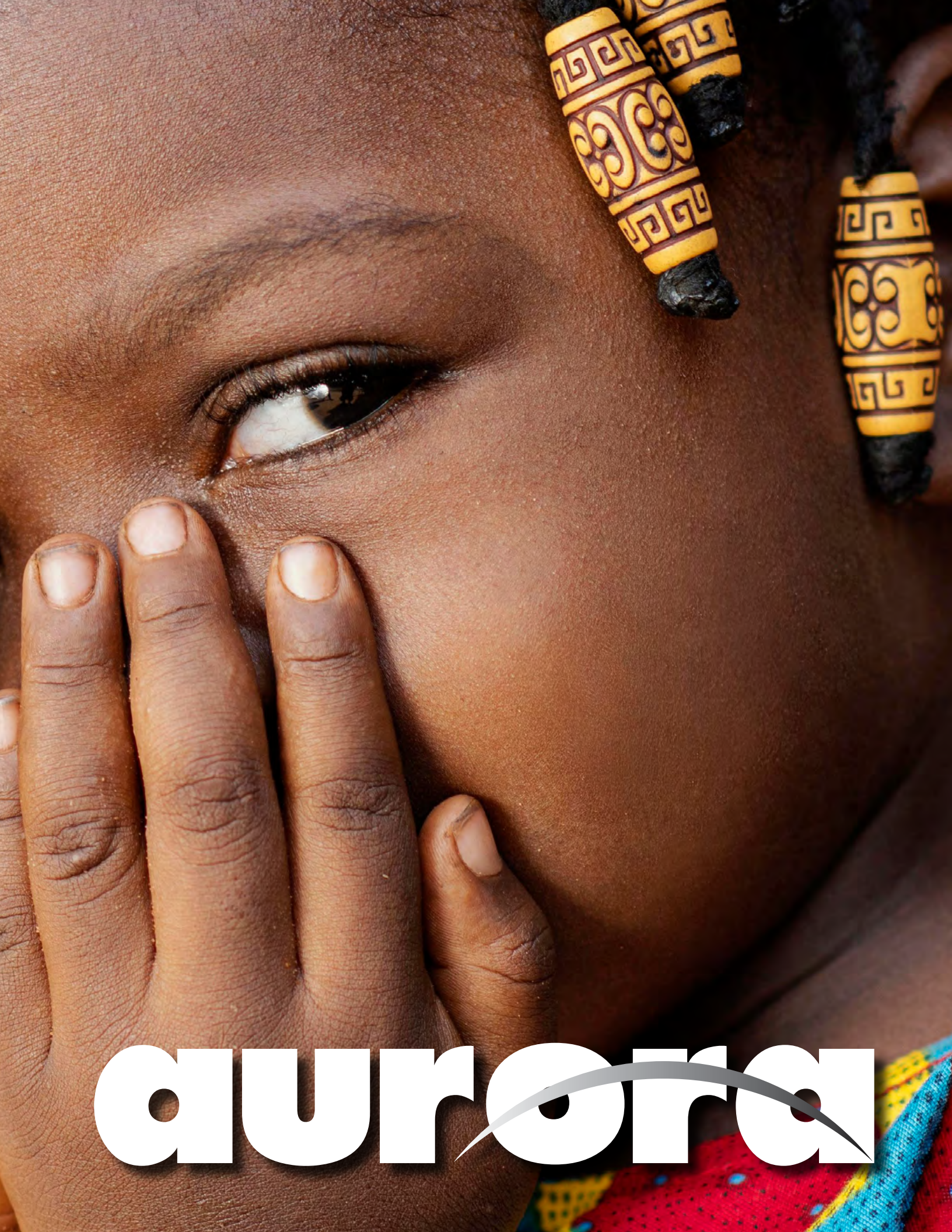
La pura verdad es que por debajo de la desgracia del COVID-19 ha habido muchos beneficios. Uno de ellos es una consciencia generalizada de nuestra dependencia y fragilidad humana. La cultura moderna con su impaciencia y deseo de conseguir todo con un “clic” del botón ha tenido que dilatar su carrera loca y redescubrir masivamente la virtud de la esperanza. El hecho científico de que la pandemia, realmente, no será vencida hasta que la raza humana llegue a la inmunidad de rebaño, nos despierta a la exigencia de la solidaridad humana tan olvidada y desprestigiada en el mundo de consumismo y de “gente desechable”. La ciencia, por un lado, ha demostrado sus límites y, por otro, sus posibilidades. La experiencia del aislamiento durante la pandemia y el abandono de las reuniones cara a cara nos han llevado al descubrimiento de los beneficios de las comunicaciones virtuales, por medio de *Skype*, *Zoom* y otras aplicaciones. Ahora podemos estar en contacto con personas, literalmente, en todas

partes del mundo; podemos enseñar usando tecnologías que hace un año atrás poco se usaban, pero que ahora se usan con naturalidad para promover la comunicación y la tarea educativa a todos niveles.

Sentado en la poltrona, contemplando la pandemia en la presencia amorosa de Dios, me enfrento con la realidad. Sobre todo, identifico la gracia que se vislumbra dentro y por debajo de la tragedia actual. Descubro que yo aprecio más ahora la humildad, el reconocimiento de la verdad acerca de quién es Dios y quiénes somos los seres humanos. Descubrí que el camino que nos lleva a Dios atraviesa exactamente lo que estamos experimentando, y no una fantasía turística de la imaginación romántica. Lo contemplo y descubro su posible significado para mí y para nuestra frágil humanidad. Me mantengo agarrado de la presencia providente de Dios, aún del Diosito de las oraciones de mi abuelita mexicana. Y me da mucho consuelo.

Posiblemente la humildad se valorizará y se le dará más importancia con miras al futuro. Me doy cuenta de que la definición de la oración ofrecida por William Barry, “una mirada amorosa hacia la realidad” es más o menos la misma para la humildad. Ambas, la oración y la virtud cristiana de la humildad, requieren que optemos por “plantar los pies firmemente sobre la tierra”, lo que Dios hizo cuando su hijo se encarnó en el seno virginal de María.





aurora